



República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala Plena

Magistrada Ponente: **Dra. Patricia Salazar Cuéllar**

ACCIÓN DE TUTELA INSTAURADA POR EL SEÑOR NÉSTOR JAIRO BETANCOURTH HINCAPIÉ, CONTRA EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA.

Fecha de Reparto	6 de octubre de 2020
Expediente Nro.	11-001-02-30-000-2020-00678-00

Manizales, octubre 6 de 2020

Honorables Magistrados
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (Reparto)
CONSEJO DE ESTADO (Reparto)
Bogotá D.C - Colombia

NESTOR JAIRO BETANCOURTH HINCAPIE, identificado con cedula de ciudadanía número 10.256.430 expedida en Manizales, Caldas, por medio del presente escrito me permito presentar **ACCION DE TUTELA** en virtud del artículo 86 de la Constitución Política y de los Decretos, 2591 de 1991, 1983 de 2017 en su artículo 1°, en contra de **LA SALA DISCIPLINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**, con ocasión de la expedición de la sentencia proferida por esa Corporación dentro del proceso disciplinario con **número de radicación 17001-11-02-000-2015-00360.00**, para que se tutelen y protejan mis derechos constitucionales fundamentales al **Debido Proceso Y Derecho De Defensa** y demás derechos fundamentales que evidencien como vulnerados.

HECHOS

1. El día 14 de febrero de 2019, se profirió fallo de primera instancia por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de la ciudad de Manizales, en la cual se me sanciona por un mes de suspensión por hechos sucedidos después de realizada la audiencia de acusación en el proceso que cursaba en **el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales**, en al cual para esa época era el titular en el cargo de Juez, en contra del señor Albeiro Cardona, quien estaba siendo juzgado, por el delito de tentativa de homicidio agravado, audiencia que se llevó a cabo el día 14 de febrero de 2014.

2. Ante el fallo adverso a mis intereses, la decisión fue apelada por mi Abogado Defensor, por ello fue conocida en segunda instancia por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

3. El día 23 de septiembre de 2015, se abrió en mí contra la investigación disciplinaria por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Manizales.

4. El día 22 de septiembre del 2020, se me comunicó a través de mi correo electrónico – njbh07@yahoo.es, por medio de un telegrama S.J. SAAM 20167 que se había confirmado por esa Honorable Sala, la sanción que se había proferido en mi contra en primera instancia.

5. Dentro de dicha comunicación se menciona: “ADVIRTIENDOLE QUE DE ACUERDO A LOS ARTÍCULOS 205 Y 206 DE LA LEY 734 DE 2002, LAS PROVIDENCIAS PROFERIDAS POR ESTA SALA SE NOTIFICARAN SIN PERJUICIO DE SU EJECUTORIA INMEDIATA”.

6. Lo anterior viola flagrantemente el **debido proceso y el derecho de defensa**, pues sin dar a conocer legalmente la sentencia se establece como ejecutoria de la misma su fecha de decisión.

7. Así mismo, lo anterior pretende desconocer la prescripción de la acción disciplinaria, la cual tuvo lugar **el 23 de septiembre del presente año**.

PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES

1. Fundamento Constitucional

El artículo 86° de la Constitución Política de 1991 señala, que la Acción Constitucional de Tutela procede contra toda *"acción u la omisión de cualquier autoridad pública"*. Las autoridades judiciales son autoridades públicas que en el ejercicio de sus funciones deben ajustarse a la Constitución y a la ley, y garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos fundamentales reconocidos dentro del Ordenamiento Jurídico Colombiano. Por esta razón, la Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la Acción

Constitucional de Tutela contra providencias judiciales que infringen los derechos fundamentales de las partes, en particular el derecho al debido proceso.

Sin embargo, la Corte ha precisado que la procedencia de la acción de tutela en estos casos **debe ser excepcional**, en atención a los principios de cosa juzgada, autonomía e independencia judicial, seguridad jurídica, y a la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela.

En desarrollo del artículo 86 constitucional, el Decreto 2591 de 1991 previó la posibilidad de vulneración de derechos fundamentales por las autoridades judiciales en sus decisiones. **La Corte Constitucional, mediante la sentencia C-543 de 1992, declaró inexecutable los artículos 11, 12 y 40 del Decreto**, los cuales se referían a la caducidad y la competencia especial de la tutela contra providencias judiciales. En aquel momento, la Corte considero que la acción de tutela no había sido concebida para impugnar decisiones judiciales y que permitir su ejercicio contra tales providencias, vulneraría los principios *de* cosa juzgada y seguridad jurídica, además de transgredir la autonomía o independencia judicial.

No obstante la declaración de **inexecutable** de **los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991**, la Corte, mantuvo abierta la posibilidad de interponer acciones de tutela contra providencias judiciales cuando estas constituyan manifiestas **vías de hecho**.

Así, a partir de 1992, la Corte comenzó a admitir la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales que constituyen vías de hecho, es decir, decisiones manifiestamente arbitrarias porque, por ejemplo, (i) se basan en normas evidentemente inaplicables (defecto sustantivo), (ii) **son proferidas con carencia absoluta de competencia** (defecto orgánico), (iii) se basan en una valoración arbitraria de las pruebas (*defecto factico*), o (iv) **fueron proferidas en un trámite que se apartó ostensiblemente del procedimiento fijado por la normativa vigente (defecto procedimental)**. Con el paso del

tiempo, el Alto Tribunal en su jurisprudencia fue identificando otros defectos constitutivos de vías de hecho.

Es de precisar, que la doctrina de las "*vías de hecho*" fue replanteada en la **sentencia C-590 de 2005**. En este fallo, la Corte señaló que el desarrollo jurisprudencial ha conducido a diferenciar dos tipos de requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales: **(i) Unos requisitos generales de naturaleza estrictamente procesal**, y unos requisitos específicos de naturaleza sustantiva que recogen los defectos que antes eran denominados vías de hecho.

2. Requisitos generales de procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

Los requisitos generales de procedencia señalados en la **sentencia C-590 de 2005**, son condiciones de procedimiento que buscan hacer compatible la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, con la eficacia de principios de raigambre constitucional y legal como la seguridad jurídica, la cosa juzgada, la independencia y autonomía del juez, y la distribución jerárquica de competencias al interior de la Rama Judicial. Estos requisitos son los siguientes y serán argumentados para el caso concreto:

a. "Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, y no de instancia".

Como antes se advirtió, las sentencias de unificación del Consejo de Estado, producen unos efectos vinculantes frente a: i) **la administración en procura de que, por esta, se resuelvan asuntos de manera similar, cuando se acredite por los peticionarios encontrarse bajo los mismos supuestos facticos y jurídicos en ellas analizados** e ii) los jueces de menor jerarquía que deben acoger los enfoques fijados por el órgano de cierre para decidir litigios con similitud jurídico-fáctica.

Teniendo en cuenta que el propósito de la función de unificar jurisprudencia es generar *"...el deber de las autoridades administrativas y judiciales de hacer una interpretación uniforme y coherente de las normas jurídicas y DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA IGUALDAD y la seguridad jurídica es un mandato general, directo y de aplicación inmediata que se debe cumplir en cualquier actuación administrativa"*², la omisión de dicho deber, genera la violación al derecho fundamental al debido proceso, situación concreta dentro de la que se enmarca la infracción de tal derecho fundamental en el presente asunto, vulneración que será demostrada posteriormente en este escrito.

Así las cosas, al evidenciarse la transgresión de derechos constitucionales fundamentales, y la interpretación errónea (y valga decir, improcedente porque la **sentencia C-1076 de 2002**, esta revestida de cosa juzgada formal y material) de la norma en criterios opuestos que transgreden el principio de la seguridad jurídica, el debido proceso y derecho de defensa y de legalidad; resulta clara la relevancia constitucional en el caso concreto, toda vez que lo que se pretende amparar por medio de esta acción constitucional es la materialización de los derechos constitucionales, toda vez que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, carece de competencia funcional para sancionar, pues entre la apertura de la investigación disciplinaria en mi contra (23 de septiembre de 2015) y la fecha de notificación de la decisión (22 de septiembre del 2020) ha operado la prescripción de la acción disciplinaria, desconociendo la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional que señala claramente que la ejecutoria de las sentencias cobra vigencia es a partir de la notificación efectuada al disciplinado.

b. *"Que se hayan agotados todos los medios – ordinarios y extraordinarios - de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius-fundamental irremediable"*.

En el caso concreto, por tratarse de evitar la consumación de un perjuicio ius-fundamental irremediable en el sentido que la materialización de la sentencia, cual carece

de competencia por prescripción de la acción disciplinaria, violaría mis derechos al trabajo, a la dignidad humana y a la honra, así como al debido proceso y derecho a la defensa.

c. "Que se cumpla el requisito de inmediatez".

A la fecha de presentación de la presente Acción Constitucional de Tutela no se ha excedido el término señalado en la jurisprudencia', por las particularidades de los supuestos fácticos del caso, la relevancia en la escala del ordenamiento jurídico y la urgencia en la presunta violación de los derechos fundamentales constitucionales se satisfacen el principio de inmediatez. Lo que se pretende es evitar la consumación de la serie de violaciones al debido proceso que se ordenará como consecuencia de la decisión, la cual no fue notificada en debida forma.

d. "Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la providencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora".

Teniendo en cuenta que pretende la Sala Jurisdiccional Disciplinaria señalar que una decisión que aún no me ha sido notificada, tuvo ejecutoria inmediata, y de esta forma revivir términos, pues a la fecha carece de competencia funcional para sancionar, pues entre la apertura de investigación disciplinaria en mi contra (23 de septiembre de 2015) y la fecha de notificación de la decisión (la misma no ha transcurrido) ha operado la prescripción de la acción disciplinaria, es decir más de 5 años.

Es clara y manifiesta la irregularidad procesal toda vez que desconoce la Sala Disciplinaria que la ejecutoria de las sentencias cobra vigencia es a partir de la notificación efectuada al disciplinado tal y como lo ha señalado el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, generando lo anterior una clara violación a mis derechos constitucionales a la defensa o contradicción y debido proceso.

e. "Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible".

Esta exigencia será desarrollada dentro de la argumentación que se plasmara al efectuar pronunciamiento para satisfacer el requisito especial relativo a la "... ***irregularidad procesal advertida...***" sobre el que de manera especial se fundamentaran las pretensiones de la presente acción.

f. "Que no se trate de sentencias de tutela".

La presente Acción Constitucional de Tutela no se interpone contra una Sentencia de tutela, sino contra la decisión adoptada por Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y la forma de dejar en firme dicho fallo.

3. Requisitos especiales de procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

En la **Sentencia de Constitucionalidad 590 de 2005**, a partir de la jurisprudencia sobre las vías de hecho, la Corte estableció la procedibilidad de la Acción Constitucional de Tutela contra Providencias Judiciales, de manera excepcional, cumpliendo alguno de los siguientes requisitos:

- a. "Defecto orgánico.
- b. Defecto procedimental absoluto.
- c. Defecto factico.
- d. Defecto material o sustantivo.
- e. Error inducido.
- f. Decisión judicial no motivada.
- g. Desconocimiento del precedente.
- h. Violación directa de la Constitución".

FUNDAMENTOS FACTICOS Y JURIDICOS

La decisión que vulnera mis derechos constitucionales fundamentales **al Debido Proceso, Defensa y Contradicción, a la igualdad y a la Seguridad Jurídica**, corresponden al fallo proferido en segunda instancia por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, mediante el cual se confirma la sanción impuesta por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la judicatura de Manizales, Caldas, pues tal decisión:

1. No se notificó el fallo antes de la ejecutoria.

2. Desconoció la notificación personal de la decisión disciplinaria a la luz de la jurisprudencia emitida por la **Corte Constitucional y Consejo de Estado**.

3. Desconoció la prescripción de la acción disciplinaria generándose con ello la falta de competencia funcional para sancionar.

La violación de los derechos fundamentales constitucionales anteriormente enunciados, deviene del **"Defecto Procedimental", Desconocimiento del precedente y la Violacion directa de la Constitución"**, causales de procedibilidad de la Acción Constitucional de Tutela.

Los defectos referidos se discriminan así:

i) Defecto procedimental

En lo atinente a este defecto, se configura en todos aquellos casos en to que **el Juez actuó completamente por fuera del procedimiento establecido**. Para la Corte Constitucional existen dos clases de defecto procedimental; uno es el defecto procedimental absoluto y el otro es el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.

El primero hace alusión de cuando el funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento establecido

para el trámite de un asunto específico, ya sea porque se tiene a un trámite completamente ajeno al pertinente, **omite etapas sustanciales del procedimiento legalmente establecido afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes en el proceso**⁴.

Sobre el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto la Corte Constitucional ha señalado, que el funcionario judicial incurre en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto cuando no tiene presente que el derecho procesal es un medio para la realización efectiva de los derechos de los ciudadanos, cuando renuncia conscientemente a la verdad jurídica **objetiva** pese a los hechos probados en el caso concreto, así mismo por la aplicación en exceso rigurosa del derecho procesal y en consecuencia de esta última desconozcan los derechos constitucionales fundamentales⁵.

En el análisis del caso concreto, una de las modalidades del defecto procedimental que es procedente es la que se encuentra relacionada con la ***pretermisión de eventos o etapas señaladas en la ley***. Esta modalidad se encuentra directamente relacionada con el ejercicio **efectivo** del Derecho a una defensa técnica, el debido proceso y todas las garantías inherentes a los procesos judiciales.

Este defecto procedimental se materializa en todos aquellos casos en donde una de las partes dentro de un proceso, **no se le notifica todas aquellas decisiones que por ley deben serle notificadas**, en este sentido, **la Sentencia T — 639 de 1996 de la Corte Constitucional** declare la existencia de una vía de hecho, pues ni siquiera se le informo al afectado la iniciación de una investigación en su contra.

Además de los elementos mencionados dentro de este defecto propio de las acciones constitucionales contra providencia judicial, el Tribunal Constitucional viene declarando el mismo, en todos aquellos casos en los que se tramitan acciones tutela y no se informa a terceros que puedan resultar **afectados con la decisión final que se adopta**.

ii) Desconocimiento del precedente

En **sentencia de constitucionalidad C-1076 de 2002** la corte señaló respecto del **artículo 206 de la Ley 734 de 2002**:

“El supuesto de hecho descrito en el art. 206 de la Ley 734 de 2002, aplicable al régimen sancionatorio de los funcionarios de la rama judicial es diferente al que aparece regulado en el inciso 2° del art. 119 de la misma ley. En efecto, en este caso, en aras a garantizar el principio de publicidad, el legislador dispuso la notificación de las providencias, mediante las cuales se resuelvan los recursos de apelación y queja por parte de la sala jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la judicatura, antes de su ejecutoria, de allí que la expresión demanda no ofrezca ningún reparo de constitucionalidad.

Así las cosas, la Corte declara exequible la expresión sin perjuicio de su ejecutoria inmediata, que figura en el art. 206 de la ley 734 de 2002”.

La interpretación de la Corte determina claramente que la ejecutoria de la providencia se encuentra necesariamente precedida del acto de publicidad de la misma, publicidad que se concreta a partir de su notificación. Es innegable entonces que la declaratoria de exequibilidad de la norma tiene lugar a partir de un ejercicio hermenéutico en el que la H. Corte Constitucional encuentra que, tal coma está redactada la disposición, la ejecutoria de la sentencia que resuelve el recurso de apelación opera despues del acto de notificación.

iii) Violación directa a la constitución

El defecto de una sentencia por violación directa de la Constitución se configura cuando el juez adopta una decisión que desconoce preceptos incorporados en la Carta Superior, lo cual genera la vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos; esta causal específica se deriva del deber que tienen todas las autoridades judiciales y administrativas de velar por el cumplimiento de la Constitución.

Acorde con lo anterior, se entiende que los pronunciamientos judiciales y administrativos en los cuales

se presenta este error, además de trasgredir el derecho al debido proceso de las partes involucradas en el trámite respectivo, también desconocen la supremacía de la Constitución Política en el ordenamiento jurídico, tal y como lo prevé el **artículo 4° de la Constitución Política**.

La jurisprudencia constitucional (sentencias T-209 de 2015, T-071 de 2012, y T-206 de 2017) ha indicado que el defecto por violación directa de la Constitución se presenta cuando se reúnen estas tres condiciones:

- En la solución de un caso se deja de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional.
- Se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata.
- El juez en sus resoluciones vulnera derechos fundamentales y no tiene en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución.

La jurisprudencia constitucional sostiene que el desconocimiento de la Constitución se puede dar, al menos, en las siguientes ocasiones:

- Cuando se desobedecen o no se toman en cuenta (ni explícita ni implícitamente) las reglas o los principios constitucionales.
- Cuando dichas reglas y principios son considerados, pero dándoseles un alcance insuficiente.
- Cuando no se aplica la excepción de inconstitucionalidad, a pesar de ser evidente y haber sido solicitada por alguna de las partes en el proceso.

DERECHO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO, DERECHO DE DEFENSA Y CONTRADICCION

El Artículo 29 de la Constitución Política consagra el *Derecho Constitucional Fundamental al Debido Proceso*, como aquel postulado estatal que se debe "*aplicar a todas las actuaciones judiciales y administrativas*". La jurisprudencia constitucional estableció el alcance¹ del derecho al debido proceso como el **deber** de las autoridades administrativas, de **respetar y garantizar el ejercicio de defensa y contradicción** de manera efectiva, congruente y ajustada a los postulados y principios del Estado de Derecho que "*posee una estructura compleja y se compone por un plexo de garantías que operan como defensa de la autonomía y libertad del ciudadano, límites al ejercicio del poder público y barrera de contención a la arbitrariedad*".

Por lo anterior, en el marco de la consolidación de precedentes jurisprudenciales en lo atinente al derecho constitucional al *debido proceso administrativo* la Corte desde sus inicios ha definido su alcance, buscando garantizar la **correcta producción** de actos administrativos y determina que todo ejercicio que debe desarrollar la administración publica en la **realización y/o materialización de sus objetivos, balances y finales estatales**, implica que permee todas las manifestaciones en cuanto a la formación y ejecución de los actos, a las peticiones que presenten los particulares, a los procesos que por motivo y con ocasión de sus funciones cada entidad administrativa debe desarrollar y desde luego, Garantizar la defensa ciudadana al indicarle a estos, los medios de impugnación señalados en las providencias administrativas.

De ese modo, el ***debido proceso administrativo*** ha sido definido como un conjunto de condiciones quo la ley le impone a la administración pública y quo se materializa

¹ Corte Constitucional. Sentencia T-327 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, citada en la Sentencia 1-352 de 2012. Al. P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub consideración número 3.4.

Corte Constitucional. Sentencia T-429 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, citada en la sentencia 1-352 de 2012. M.P /ore Ignacio Pretelt Chaljub consideración número 3.4.

en el cumplimiento de una secuencia ordenada y estructurada de actos por parte de la autoridad administrativa-, a través de los cuales se pretende asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, la validez de sus propias actuaciones y la garantía del derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados.

En razón a ello, la Corte ha expresado que con la aplicación y garantía del derecho al *debido proceso administrativo* se materializan postulados constitucionales, tales como: (i) **el principio de legalidad**; (ii) **el acceso a la jurisdicción y a la tutela judicial efectiva de los derechos humanos**; (iii) a qua se adelante por la autoridad competente y **con pleno respeto de las formas propias de cada juicio definidas por el legislador** (iv) a qua no se presenten dilaciones injustificadas; (v) **el derecho de defensa y contradicción**; (vi) **el derecho de impugnación**; y (vii) **la publicidad de las actuaciones y decisiones adoptadas en los procedimientos**, entre otras.

Estas garantías se interrelacionan, de tal forma que no pueden ser aplicadas de manera aislada en los procesos judiciales o administrativos.

En la sentencia C-980 de 2010², indicó que el debido proceso se “*muestra como desarrollo de principio de legalidad, representa un límite al ejercicio del poder público, y en particular, al ejercicio del ius puniendi del Estado. Em virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando la formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos*”.

Finalmente la jurisprudencia constitucional ha definido el debido proceso como “*el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia*”⁹. El derecho de **DEFENSA** y **CONTRADICCIÓN**, como arista necesaria del derecho al **DEBIDO PROCESO**, se esgrimen dentro del Ordenamiento Jurídico Colombiano como una necesidad de **proteger y garantizar**, en el transcurso de un - proceso, que la actuación se lleve con el mayor

² "Corte Constitucional - Sentencia C-980 de 2010 — MP: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

respeto de las oportunidades procesales para cada una de las partes, es decir, que se garantice que los intervinientes en una Litis puedan tener conocimiento y debatir los elementos procesales que se van insertando y apareciendo a lo largo del proceso, so pena de incurrir en nulidades y de permitir la procedencia de la acción de tutela por violación de un derecho de raigambre constitucional que constituye el Debido Proceso.

La sentencia C - 1076 de 2002 exige la notificación previa a la ejecutoria de la decisión, no solo en el caso del inciso 2° del artículo 119 de la ley 734 de 2002, sino también en el caso del artículo 206, porque allí expresamente lo consagro en el obiter dictum de la decisión³.

El cargo de violación al debido proceso y a la defensa, se sustenta en el contenido de **la Sentencia C-1076 de 2002** de la Corte constitucional del estudio de constitucionalidad que hace de los artículos 119 y 206 de la ley 734 de 2002 decisión que constituye cosa juzgada (material y formal), y **la sentencia 06148 de 2018 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección B**, que indican que las decisiones disciplinarias de segunda instancia, no quedan ejecutoriadas al momento de su suscripción, sino, una vez se hayan notificado a los sujetos procesales o interesados.

En este punto, es oportuno aclarar que desconozco el contenido del fallo, dado que el día 22 de septiembre del corriente año, recibí en mi correo electrónico el telegrama número S.J.AMCM 20167 fechado el 22 de septiembre, en los

³ "Corte Constitucional de Colombia - Sentencia C-035 de 2014. MT: Luis Ernesto Vargas Silva- Cfr. Sentencia 1263 de 2001. En esta Última providencia la Corte explico que "el derecho fundamental al debido proceso consagra constitucionalmente como la garantía (que tiene toda persona a un proceso justo y adecuado, esto es, que en el momento en que el Estado pretenda comprometer o privar a alguien de un Bien jurídico no puede hacerlo sacrificando o suspendiendo derechos fundamentales.El debido proceso constituye una garantía infranqueable para todo acto en el que se pretenda –legítimamente imponer sanciones, cargos o castigos. Constituye un límite al abuso del poder de sancionar y con mayor razón, se considera un principio rector de la actuación administrativa del estado y no sólo una obligación exigida a los juicios criminales".

7 Corte Constitucional de Colombia - Sentencia T-796 de 2006. M.P: Mauricio González Cuervo Cfr. Sentencia C-012 de 2013.

Corte Constitucional de Colombia - sentencias de 1992 y C-980 de 2010. Cfr. Sentencia C-012 de 2013.

siguientes términos: "NOTIFICOLE, DENTRO DEL PROCESO DISCIPLINARIO NO. 170011102000201500360 01 EN SALA 85 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020: RESOLVIO: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 14 de febrero de 2019, PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 14 de febrero de 2019, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, por medio de la cual se SANCIONÓ al doctor NÉSTOR JAIRO BETANCOURTH HINCAPIÉ, JUEZ SÉPTIMO PENAL DEL CIRCUITO DE MANIZALES, con suspensión de UN (1) MES en el ejercicio del cargo, por haber incurrido en la falta prevista en el artículo 154 numeral 9º de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el numeral 4º del artículo 138 de la Ley 906 de 2004, imputada como grave a título de culpa grave, conforme lo indicado en esta providencia. ADVIRTIENDOLE QUE DE ACUERDO A LOS ARTÍCULOS 205 Y 206 DE LA LEY 734 DE 2002, LAS PROVIDENCIAS PROFERIDAS POR ESTA SALA SE NOTIFICARAN SIN PERJUICIO DE SU EJECUTORIA INMEDIATA. TENIENDO EN CUENTA LOS DECRETOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA QUE ESTABLECEN EL AISLAMIENTO OBLIGATORIO Y EL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA, LOS ACUERDOS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ENTRE ELLOS EL ACUERDO PCSJSA20-11521,11549,11581, DONDE SE ORDENÓ LA REAPERTURA DE LOS TÉRMINOS EN LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS DE ABOGADOS Y FUNCIONARIOS Y DEMÁS ACUERDOS EXPEDIDOS POR EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA LO DISPUESTO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS DE ESTA SALA, Y LO ESTABLECIDO MEDIANTE DECRETO LEGISLATIVO 806 DE 2020 POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA EL USO DE TECNOLOGÍAS PARA LAS COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES EN LAS ACTUACIONES JUDICIALES, CUMPLIDOS LOS TÉRMINOS SE PROCEDERÁ A SU NOTIFICACIÓN POR ESTADO; DE LO CUAL SE ANEXA CONSTANCIA SECRETARIAL EN 10 FOLIOS. CUALQUIER SOLICITUD FAVOR DIRIGIRLA AL CORREO acuerdo11517saladisciplinaria@consejosuperior.ramajudicial.gov.co".

Comunicación que informa la ejecutoria previa de la decisión, circunstancia que hace que resulte inane cualquier actuación del suscrito como disciplinado, encaminada a notificarme personalmente de una decisión, que dentro de los términos de ejecutoria bien podría solicitarse su aclaración, corrección y complementación de la misma.

Así las cosas, es evidente que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, **ha pretermitido la notificación previa de la decisión de segunda instancia** y ha dado por ejecutoriada una decisión que no lo está, con fundamento en una en una errónea y desfavorable interpretación de la disposición contenida en el **artículo 205 de la ley 734 de 2002** (informando de la ejecutoria de la sentencia desde la suscripción de la misma y no desde mi notificación personal), desconociendo la pacífica jurisprudencia de la Corte Constitucional desde el año 2002 y reiterada recientemente por el Consejo *de* Estado desde el año 2009 (sentencia del 29 de septiembre de 2002) y retomada en el año 2018.

Los precedentes jurisprudenciales que respaldan mi petición, y que sustentan la presente acción de tutela, ante la inminencia de la sanción anunciada, son las siguientes:

- La corte Constitucional, mediante la **sentencia C-1076 de 2002**, la cual a su vez retoma los argumentos de la Sentencia C- 641 de 2002, respecto a la ejecutoria de las sentencias, fallos o decisiones de cierre disciplinarias indica categóricamente que, deben notificarse antes de su ejecutoria sin importar si se trata del régimen ordinario o especial para los funcionarios de la rama judicial (artículos 119 y 206 de la ley 734 de 2002) así:

"...1. Examen de constitucionalidad del inciso segundo del art. 119 de la Ley 734 de 2002.

Encuentra la corte importantes semejanzas entre la disposición demandada y la expresión quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente, que aparece recogida en el art. 187 de la Ley 600 de 2000, disposición que fue objeto de pronunciamiento en el fallo C-641/02. En efecto, a pesar de que en el primer caso se trata de un asunto disciplinario y en el segundo se está en presencia de uno de carácter penal, el contenido normativo el mismo: se trata de una providencia mediante la cual se resuelve un recurso de apelación o de queja, la cual queda ejecutoriada el día que es suscrita por el funcionario competente y no al momento de ser notificada. De tal suerte que, en el presente caso, resultan aplicables las consideraciones expresadas por esta Corte en su sentencia C-641/02: "Por otra parte, entratándose de las providencias que deciden los recursos de apelación o de queja contra las providencias interlocutorias, aparentemente no sería necesario notificar su contenido, pues estas decisiones, si bien pueden tener una incidencia importante en el desenvolvimiento del proceso, no es evidente que la sociedad requiera conocer su contenido, ni que deban ser comunicadas a los sujetos procesales para efectos de su cumplimiento. Con todo, también en este caso, la Corte considera que es necesario retirar del ordenamiento jurídico la interpretación que excluye de notificación a esas providencias, por las siguientes razones:

"El principio de publicidad es la -regla general que gobierna las actuaciones judiciales, por lo que toda excepción a este principio debe operar de forma restrictiva y estar plenamente justificada a partir de los fines y valores previstos en la Carta Política y en las disposiciones emanadas de los tratados internacionales de derechos humanos. De ahí que, aplicando el principio de favorabilidad en interpretación del alcance del principio de publicidad, resulta que, en caso de duda entre dos o más interpretaciones razonables de una misma disposición procesal, el operador deba preferir aquella que favorezca la publicidad del proceso".

Y más adelante señala lo siguiente:

"Del mismo modo, el principio de publicidad en las actuaciones judiciales implica que sus excepciones deben operar de manera restrictiva, pues de ser así se correría el riesgo de convertir la excepción en una regla. Por esta razón, si la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos establecen que el principio de publicidad solo admite excepciones razonables y justificables a partir de una ponderación de fines y valores constitucionales, no puede interpretarse la disposición acusada en el sentido de entender que ella permite a las autoridades judiciales sustraerse del deber de notificar dichas providencias, puesto que ello conduce a convertir la excepción en regla general. De tal suerte que, a juicio de la Corte, en materia disciplinaria se aplica también la regla según la cual las decisiones de segunda instancia mediante las cuales se resuelven los recursos de apelación y queja quedan ejecutoriadas no con la simple suscripción de la misma sino con su notificación.

"...La Corte considera que, al igual que lo precisó en su sentencia C-641/02, por razones de seguridad jurídica y por su importancia práctica, haciendo uso de la facultad de establecer los efectos de sus sentencias, expresamente establece que solo a partir de la publicación y comunicación de este fallo, se entiende que los efectos jurídicos de las decisiones que resuelven los recursos de apelación y queja, operan a partir de la notificación y no de su mera ejecutoria..."

"...2. Examen de constitucionalidad del art. 206 parcial de la Ley 734 de 2002.

El supuesto de hecho descrito en el art. 206 de la Ley 734 de 2002, aplicable al régimen sancionatorio de los funcionarios de la rama judicial es diferente al que aparece regulado en el inciso segundo del art. 119 de la misma ley. En efecto, en este caso, en aras a garantizar el principio de publicidad, el legislador dispuso la notificación de las providencias, mediante las cuales se resuelvan los recursos de apelación y queja por parte de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, antes de su ejecutoria. De allí que la expresión demandada no ofrezca ningún reparo de constitucionalidad.

"...Así las cosas, la Corte declarara exequible la expresión sin perjuicio de su ejecutoria inmediata, que figura en el art. 206 de la Ley 734 de 2002..."

"...RESUELVE:

24. Declarar la EXEQUIBILIDAD del inciso segundo del artículo 119 de la Ley 734 de 2002, siempre y cuando se entienda que los efectos jurídicos se surten a partir de la notificación de las providencias.

25. Declarar la EXEQUIBILIDAD de la expresión sin perjuicio de su ejecutoria inmediata, que figura en el art. 206 de la Ley 734 de 2002...”.

Una vez realizada la lectura hermenéutica de la anterior decisión, es apenas lógico concluir que **la Corte Constitucional**, mediante sentencia **C-1076 de diciembre 5 de 2002**, declaró exequible condicionalmente, **el inciso 2° del artículo 119 del CDU**, cuyo contenido, en lo pertinente, que es exactamente igual al contenido normativo del **artículo 205** de la misma ley, en los siguientes términos:

"24. Declarar la exequibilidad del inciso segundo del artículo 119 de la Ley 734 de 2002, siempre y cuando se entienda que los efectos jurídicos se surtan a partir de la notificación de las providencias".

En la fundamentación de esta decisión, expresó la alta corporación:

"Con todo, también en este caso, la Corte considera que es necesario retirar del ordenamiento jurídico la interpretación que excluye de notificación a esas providencias, por las siguientes razones:

"El principio de publicidad es la regla general que gobierna las actuaciones judiciales, por lo que toda excepción a este principio debe operar de forma restrictiva y estar plenamente justificada a partir de los fines y valores previstas en la Carta Política y en las disposiciones emanadas de los tratados internacionales de derechos humanos. De ahí que, aplicando el principio de favorabilidad en la interpretación del alcance del principio de publicidad, resulta que, en caso de dada entre dos o más interpretaciones razonables de una misma disposición procesal, el operador deba preferir aquella que favorezca la publicidad del proceso">> (resaltado fuera de texto).

Y a renglón seguido al abordar el estudio del alcance del artículo 206, cuando pregona la ejecutoria inmediata concomitante con la notificación personal del fallo de única o segunda instancia, aclara:

"...En efecto, en este caso, en aras a garantizar el principio de publicidad, el legislador dispuso la notificación de las providencias, mediante las cuales se resuelvan los recursos de apelación y queja par parte de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, antes de su ejecutoria. De allí que la expresión demandada no ofrezca ningún reparo de constitucionalidad. (Subrayas y negritas fuera de texto)..."

De lo expuesto se desprende inequívocamente que, de acuerdo con lo expresado por el **máximo órgano jurisdiccional de cierre** en materia Constitucional; las providencias que resuelvan el recurso de apelación deben ser notificadas antes de su ejecutoria y no al revés como sucedió en mi caso.

Resultaría apenas suficiente y esclarecedor para argüir que, en mi caso, como funcionario de la Rama Judicial (y aun, en el régimen ordinario o cualquier otro especial), el mandato y el espíritu de la ley, es garantizar el principio de publicidad antes de la ejecutoria en el ámbito disciplinario, pues es claro que ese es el interés de la Corte constitucional al aplicar el principio de favorabilidad al alcance del término de ejecutoria.

Como en este asunto, no se dio la publicación en la debida forma, al día de hoy está prescrita la acción disciplinaria al momento de presentar esta acción constitucional.

Sumado a lo anterior, por su parte, **el Consejo de Estado** desde el año 2009 y en **decisión del 1° de agosto de 2018**, es claro en indicar que la ejecutoria de las decisiones de cierre en materia disciplinaria solo alcanza su ejecutoria una vez se ha notificado personalmente la decisión al disciplinado -sujetos procesales- y no antes.

Al tenor ha dispuesto el Consejo de Estado en **Sentencia 06148 de 2018, Sección Segunda, Subsección B**, Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez, primero (1°) de agosto de dos mil dieciocho (2018) Expediente: 250002342000201306148 01 (0491-2017), dispuso:

"Bajo este hilo conductor, y sin necesidad de unificar las posturas de las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyó el motivo para que el presente proceso fuera traído por importancia jurídica a la Sala Plena, a continuación se explicaran las razones esenciales por las cuales se considera la tesis de recibo que debe imperar es la que proclama que la sanción disciplinaria se impone,

cuando concluye la actuación administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo principal, decisión que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este el acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta disciplinaria. El él se concreta la expresión de la voluntad de la administración...”.

En su misión de unificar la jurisprudencia, la Sala adopta la tesis según la cual en tratándose de régimen sancionatorio disciplinario, la sanción se impone de manera oportuna si dentro del término asignado para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto que concluye la actuación administrativa sancionatoria (...) (Negritas y subrayado fuera del texto).

Para consolidar el cargo, concluiré indicando que riñe abiertamente con la lógica y con el principio de identidad la declaratoria de ejecutoria de la providencia de segunda instancia, pasando por alto la notificación personal, arrojando la decisión con una falsa legalidad derivada del **artículo 206 del CUD**, al anotar que la notificación posterior es tan solo para efectos de oponibilidad de la decisión frente al disciplinado; porque — una cosa no puede 'ser' y 'no ser' al mismo tiempo— el que se asuma o se acepte que un fallo o decisión judicial y/o administrativa de única o segunda instancia, apenas en formación, pudiere llegar a tenerse desde el punto de vista jurídico como debidamente adoptada, si al mismo tiempo se debe admitir que tal decisión no ha empezado a generar efectos jurídicos; si no rige en modo alguno y, por ende, resulta irrelevante para el mundo del derecho; si no ha vista aun la luz del orbe jurídico desde cuya óptica se la pretende examinar y hasta juzgar, todo sencillamente porque todavía no está en firme o, lo que es lo mismo, porque no ha alcanzado ejecutoria, y entonces deba asimilarse a un fallo que jamás existió puesto que nunca adquirió significado para el mundo del derecho y nunca produjo un efecto que hubiere alterado o modificado en esa órbita el estado de cosas preexistente.

Súmese a lo anterior lo peligrosa que resulta para un Estado social y de Derecho y en especial para sus asociados, la aplicación que da la Sala Jurisdiccional Disciplinaria a la ejecutoria de la decisión de segunda instancia en tratándose

de funcionarios judiciales, consistente en considerar que será la fecha de suscripción de la sentencia y no la de su ejecutoria después de la debida notificación, es la rampante pretermisión del querer del legislador, interpretado por la Corte Constitucional desde el año 2002.

Con el proceder irregular de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura se pasa de calle el **principio constitucional de publicidad**, puesto que entonces bastará con que se pueda establecer una determinada fecha que quepa dentro del plazo de prescripción de la acción disciplinaria como la fecha de expedición o adopción del correspondiente fallo sancionatorio de única o segunda instancia, al margen de que la decisión respectiva no hubiere sido debidamente notificada, comunicada o publicada, para que haya lugar a concluir entonces que el respectivo fallo habría sido adoptada oportunamente.

Bajo este parámetro quedaría en manos del fallador el escoger y jugar a su antojo con el fechador, para incluir en la sentencia sancionatoria la fecha que mejor se le antoje como la de su expedición - previa verificación que ese mismo fallador realizará para asegurarse de que la fecha escogida se encuentra dentro del plazo establecido en la ley para el ejercicio de sus facultades sancionatorias — puesto que no importara entonces que la fecha escogida no corresponda en la realidad a la fecha efectiva de expedición de la sentencia y aunque importe menos que la fecha escogida resulte muy distante de aquella en la cual el fallo en cuestión se le hubiere dado a conocer al disciplinado a través de los medios que la ley establece para ello.

Como consecuencia de lo antes expuesto, se concreta la **violación nuevamente al debido proceso**, al carecer de competencia funcional la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para confirmar la sanción impuesta en sentencia de segunda instancia, al encontrarse prescrita la acción disciplinaria desde el 23 de septiembre de 2020, como se explica:

El día 23 de septiembre de 2015, el Consejo Seccional de Caldas, Sala disciplinaria, con ponencia del Dr. Miguel Ángel Barrera Nuñez profirió auto de apertura de investigación.

El 14 de febrero de 2019, profirió sentencia en donde se me encontró responsable del cargo propuesto y se me sancionó con un mes de suspensión.

La anterior decisión fue recurrida, y mediante decisión (conforme a telegrama recibido el día 22 de septiembre de 2020), fechado en la misma data, se confirmó, sin que al día de hoy del año que avanza, se hubiera materializado mi notificación personalmente; no por alguna argucia o sustracción del suscrito, sino porque sencillamente se ordenó comunicarme una sentencia que, a juicio de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ya se encontraba ejecutoriada.

Al respecto, **el artículo 30 de la ley 734 de 2002** dispone, que el conteo de los cinco años inicia a partir de la apertura de la investigación, momento a partir del cual, el Estado pierde la potestad y competencia para continuar con la acción disciplinaria en mi contra.

Por su parte, **el Consejo de Estado** en decisión 06148 de 2018, establece:

"...2.3.1. Resolución del primer problema jurídico, referido a la prescripción de la acción disciplinaria (...).

Esta Subsección en reiteradas ocasiones, ha señalado que la figura de la prescripción de la acción disciplinaria fue plasmada por primera vez en el artículo 12 de la Ley 25 de 1974, con el siguiente tenor literal:

"ARTICULO 12. La acción disciplinaria prescribe en cinco años contados a partir del último acto constitutivo de la falta".

Posteriormente, el Legislador mediante la Ley 13 de 1984, en el artículo 6° señaló lo siguiente:

"ARTICULO 6. Prescripción de la acción disciplinaria. La acción disciplinaria prescribe en cinco (5) años contados a partir del último acto constitutivo de la falta, término dentro del cual deberá igualmente imponerse la sanción". (Subrayado fuera de texto).

Con posterioridad se expidió la Ley 200 de 1995 –Código Disciplinario Único-, en cuyo artículo 34 consagró la figura de la prescripción de la acción disciplinaria en los siguientes términos:

"ARTICULO 34. Términos de prescripción de la acción y de la sanción. La acción disciplinaria prescribe en el término de cinco (5) años. La prescripción de la acción empezará a contarse para las faltas instantáneas desde el día de la consumación y desde la realización del último acto, en las de carácter permanente o continuado. (...)

Las normas antes transcritas fueron analizadas e interpretadas por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado en la sentencia de 23 de mayo de 2002 dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por el señor Álvaro Hernán Velandia Hurtado contra la Procuraduría General de la Nación, en un asunto en el cual el actor argumentaba que había apercado la prescripción de la acción disciplinaria porque el fallo sancionatorio que resolvió los recursos de la vía gubernativa no fue expedido y notificado dentro del plazo de 5 años contados desde la comisión de la falta...".

Con esta reseña de unificación Jurisprudencial, resulta evidente que a la fecha la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura **carece** de competencia para sancionarme, pues no se notificó la sentencia de segunda instancia, dentro de los cinco (5) años siguientes a la apertura de la investigación, porque hasta el día de hoy no se ha realizado en la debida forma señalada por la honorable Corte Constitucional.

Ahora, debemos decir en cuanto a las notificaciones de las providencias, que estas se deben hacer en forma personal y con copia en mano de la providencia respectiva, en este aspecto tenemos que tener en cuenta, el tiempo en la que se deba hacer, o sea el normal.

Otra situación bien distinta es el tiempo en que estamos viviendo en el día de hoy, una fuerte pandemia del covid 19, a partir de marzo del presente año, estas notificaciones se hacen en la forma como lo dice el **decreto 806 del 2020**, que señaló que se deben hacer por vía internet al correo electrónico propuesto por la parte, pero se debe hacer de una forma completa, con copia de la providencia magnética o digital, y esta es la manera como se deben realizar, ya que la Corte Constitucional, al hacer el estudio de constitucionalidad de este decreto lo declaro exequible.

Ahora a raíz de esa indebida notificación trae como consecuencia, la **prescripción de la acción disciplinaria** conforme al **artículo 30 de la ley 734 de 2012**, cuando señala que la acción prescribe en **cinco (5) años** a partir del auto de apertura la investigación.

En este asunto sometido a estudio tutelar, se emitió auto de **apertura de la investigación** el día 23 de septiembre de 2015, con **decisión de primera instancia** el día 14 de febrero de 2019, ahora **la segunda instancia** según el comunicado que me llegó al correo electrónico es del 22 de septiembre de 2020, pero considero que esa notificación es **indebida**, no tiene efectos legales, porque no fue personal como ordena la norma y mucho menos por vía de internet, porque jamás, se me envió copia del fallo, ni siquiera conozco en este momento el contenido de la decisión tantas veces aludida.

Por ello es que sostengo que la acción se prescribió por indebida notificación del fallo, el cual es totalmente desconocido por mí.

P R E T E N S I O N E S

Con fundamento en lo anteriormente expuesto solicito, señores Magistrados, tutelar los derechos fundamentales como lo son el **Derecho al Debido Proceso**, al **Derecho de Defensa** en mi favor para lo cual se ordenara:

1. **Decretar la inexistencia de la notificación** de la decisión proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la judicatura, como pretensión principal.
2. Como consecuencia de la anterior, Decretar la **prescripción** de la acción disciplinaria por haber superado el termino de los cinco (5) años que establece el **artículo 30 de la Ley 734 de 2002**.
3. Ordenar dejar sin efecto la sanción que se me había impuesto.
4. Ordenar que se en caso de haberse realizado anotaciones en mi contra como antecedentes disciplinarios, que estos sean dejados sin efectos.

FUNDAMENTOS DE DERECHOS

Artículos 86 y 29 de la C.N., Dcto. 2591 de 1.991 y demás normas concordantes y afines dentro del presente proceso.

PRUEBAS

- Copia digital del fallo de primera instancia proferido por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura.
- Copia digital de la presunta notificación en viada a mi correo electrónico por parte de la secretaria de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

ANEXOS

Los anunciados en el acápite de pruebas.

JURAMENTO

Bajo la gravedad del juramento manifiesto que no se ha iniciado ninguna otra acción ante ninguna otra autoridad que verse sobre los mismos hechos.

DIRECCIONES PARA NOTIFICACIONES

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en el correo electrónico:

saladisciplinaria@consejosuperior.ramajudicial.gov.co

El Accionante: Calle 27 No. 17-21, piso 4° Manizales, Caldas

Móvil Cel.: 3146319632

E-mail: njbh07@yahoo.es

Atentamente;

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'N' and 'B' that are interconnected. The signature is written on a light-colored, slightly textured background.

NÉSTOR JAIRO BETANCOURTH HINCAPIÉ

C.C. No. 10.256430 de Manizales



Radicación No. 17001-11-02-000-2015-00360-00

Magistrado Ponente: Dr. MIGUEL ÁNGEL BARRERA NÚÑEZ

Discutido y aprobado en Manizales - Caldas, según Acta de Sala No. 005 del catorce (14) de febrero de dos mil diecinueve (2019).

I. ASUNTO

Surtido el procedimiento previsto en la Ley 734 de 2002 y no observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a emitir la sentencia que en derecho corresponda dentro de la actuación seguida en contra del doctor **NÉSTOR JAIRO BETANCOURTH HINCAPIÉ**, en calidad de JUEZ SÉPTIMO PENAL DEL CIRCUITO DE MANIZALES.

II. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADO

Se trata del doctor **NÉSTOR JAIRO BETANCOURTH HINCAPIÉ**, JUEZ SÉPTIMO PENAL DEL CIRCUITO DE MANIZALES, identificado con la cédula de ciudadanía 10.256.430 de Manizales.

III. HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL

3.1. Por reparto realizado el 11 de agosto del año 2015, correspondió al Magistrado que hoy funge como ponente conocer la queja presentada por la señora Lina María Cardona contra el Juez Séptimo Penal del Circuito de Manizales – Caldas por prejuzgamiento.

Mostró su inconformidad con la sentencia proferida por el doctor **Néstor Jairo Betancourth Hincapié** al interior del proceso No. 2014-84055, que por los delitos de tentativa de homicidio agravado y tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, accesorios o partes o municiones se instruyó contra su hijo, José Albeiro Agudelo Cardona; involucrado en hechos acaecidos el 06 de noviembre de 2014 a las 6:40 a.m. en el sector denominado el Guamo de Manizales, donde fue

Radicación: 2015-00360
Disciplinada: NESTOR JAIRO BETANCOURTH HINCAPIÉ

agredido con arma de fuego el señor Eddy Santiago González Cardona; conducta por la que también se capturó a alias "Dino" y "Mamipe".

Lo anterior, por cuanto revisado el vídeo de la audiencia de formulación de acusación, se ve como el juez en conversación sostenida con el abogado de su hijo, vaticinó la sentencia condenatoria que más tarde profirió.

Se quejó también porque el funcionario judicial obligó al testigo Jesús María González Pérez a comparecer, lo que lo puso nervioso y no, como refirió en su sentencia el disciplinado, que había sido por encontrarse en la Sala la madre del sindicado, José Albeiro.

Como si lo anterior no bastara, el Juez compulsó para la Fiscalía General de la Nación el testimonio de la señora Beatriz Elena Villa López, quien dio cuenta de haber visto en su casa al muchacho José Albeiro Agudelo, en la fecha y hora de los hechos.

Para finalizar, aseguró el funcionario la sacó de varias audiencias argumentando que ella intimidaba a los testigos – folios 2 a 15 del c.o.-.

3.2. Auto de apertura de investigación. Se profirió el día 23 de septiembre de 2015 – folios 16 a 17 del c.o.- Notificandose personalmente al investigado el 14 de octubre de ese año – folio 23 del c.o.-

3.3. Los certificados de antecedentes disciplinarios impresos tanto de la página de la Procuraduría General de la Nación como de la Secretaría de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria dan cuenta de la ausencia de anotaciones para el doctor **Betancourth Hincapié** – folios 18, 19, 240 y 241 del c.o.-

3.4. Conforme certificado expedido el 14 de octubre de 2015 por el Presidente del Tribunal Superior de Manizales se constató que el doctor **Betancourth Hincapié**, fue nombrado como JUEZ SÉPTIMO PENAL DEL CIRCUITO DE MANIZALES desde el 4 de noviembre de 2009, ejerciéndolo sin solución de continuidad del 1º de marzo de 2012 a la fecha de expedir el documento – folio 24 del c.o.-

3.5. Se cuenta con la constancia de tiempo de servicios y salario del disciplinado de febrero a septiembre de 2015; en la que se evidencia el doctor **Betancourth**

Radicación: 2015-00360
Disciplinada: NESTOR JAIRO BETANCOURTH HINCAPIÉ

ingresó a la Rama Judicial, Seccional Caldas, desde el 16 de mayo de 1987 como Oficial Mayor del Juzgado Segundo de Menores de Manizales, cargo que ocupó pocos meses, para después ser nombrado como Juez Primero Promiscuo Municipal de Marulanda el 16 de junio de 1989; en adelante continuó ejerciendo cargos de titular de despacho judicial de Juzgado Promiscuo Municipal, Civil Municipal, Penales Municipal, Circuito y Especializado del Circuito – folios 25 a 27 del c.o.-

3.6. El doctor **Néstor Betancourth Hincapié** se pronunció el 14 de octubre de 2015, explicando con relación al video aportado al presente proceso disciplinario, se trató de una conversación informal, privada y cordial que se dio por fuera de la vista pública; no obstante, el auxiliar del despacho imprudentemente dejó abierta la grabación.

Sobre las expresiones utilizadas acotó usarias con personas a quienes guarda aprecio y confianza, haciéndolo en todo caso con todo el respeto debido, sin que la conversación hubiere afectado la decisión que expidió en la sentencia a la que llegó con el análisis de las pruebas recaudadas.

En cuanto al retiro de la audiencia de la señora Lina María Cardona, manifestó ser cierto por cuanto en su momento advirtió la intimidación que ejercía sobre los testigos.

Para finalizar solicitó el archivo de las diligencias – folios 30 a 31 del c.o.-

3.7. El día 23 de noviembre de 2015, se escuchó al abogado Vidal de Jesús Cardona Echeverri, quien contó conocer al disciplinado desde hacía unos 20 años, manteniendo con él una relación de comunicación normal frente a un funcionario público, calidad en la que siempre lo ha visto.

Expresó no solo con el doctor **NESTOR JAIRO** sino con muchos otros operadores judiciales tiene una excelente relación, siendo usual que se queden después de las audiencias a charlar sobre diversos temas.

En el caso concretamente denunciado, refirió no haber sentido en ningún momento que el Juez le hubiere enunciado el sentido del fallo con sus

Radicación: 2015-00360
Disciplinada: NESTOR JAIRO BETANCOURTH HINCAPIÉ

comentarios, mismos que concibió como jocosos ya que siempre molestaban diciéndole que lo dejara ganar una.

Sobre la acotación que hizo en el recurso de apelación frente al tartamudeo del señor Jesús María González Pérez, esbozó que no lo hizo a modo de burla sino queriendo significar se trataba de una condición natural del citado ciudadano.

Narró haber apelado la sentencia proferida por el Juez al no estar de acuerdo con el sentido adverso pues si bien en principio algunos testigos señalaron al señor José Albeiro Agudelo Cardona; después, bajo la gravedad del juramento se retractaron, sin que él como abogado tuviere ninguna participación en la retractación, ni hiciera ningún tipo de componenda o influencia sobre ellos, manifestaciones que asumieron a sabiendas de las consecuencias que les acarrearía el falso testimonio.

Aseguró no haberse dado cuenta que hacía la señora Lina María Cardona en las audiencias pues él se encontraba de espaldas al público.

Al preguntarle el disciplinado: si sintió como una afrenta los comentarios hechos por fuera de audiencia, contestó haber tenido una discusión con la señora Lina Cardona por ese asunto pues ella le pidió argumentar el recurso de apelación con un prejuizgamiento del servidor judicial contra de su hijo, a lo que él se negó explicándole que eso no tenía nada que ver pues se trataba de manifestaciones extraprocesales, le dijo que el proceso no se manejaba con chismes sino jurídicamente, por lo que ella se disgustó e indicó lo denunciaría, contestándole él que estaba en todo su derecho e incluso, si era su deseo solicitara cambio de abogado en la Defensoría.

Expresó que en el grado de confianza que tiene con diversos operadores judiciales, tiene charlas “pesadas” pero respetuosas que nada tienen que ver o influyen en las resultas del proceso; con el disciplinado ha tenido varios procesos, sintiendo siempre se trata de un funcionario muy responsable y sopesado en sus decisiones, sin ánimo alguno de parcialidad alguno.

3.8. En escrito del 25 de noviembre de 2015, el disciplinado solicitó ser escuchado en diligencia de versión libre y espontánea; así como, la práctica de pruebas que

Radicación: 2015-00360
Disciplinada: NESTOR JAIRO BETANCOURTH HINCAPIÉ

se decretaron por el Magistrado sustanciador, siendo además recibida copia de la sentencia N° 051 aportada por el disciplinable - folios 30 a 69 del c.o.-

3.9. El 9 de marzo de 2016, se amplió la versión libre del doctor **Néstor Betancourth** quien manifestó ser ciertas las manifestaciones de la quejosa en lo que a la transcripción literal que hizo; no obstante, consideró se trató de una conversación de carácter privado, que por imprudencia de su auxiliar en la audiencia no apagó el registro una vez se dio por finalizada la misma y por ello continuó rodando la grabación.

Contextualizó la conversación refiriendo conoce hace muchos años al abogado Vidal y al ver la abundante prueba que existía en el proceso penal consideró ajustado hablarle en tratándose de un sistema de justicia premial donde la Fiscalía podía negociar con los procesados; siendo un camino el aceptar los cargos para obtener un beneficio, aunque ya había perdido la primera oportunidad del 50% por no haber sido capturado en flagrancia; por ello el llamamiento del abogado lo fue de manera amistosa.

Aseguró ser de la tesis, no compartida por la Corte ni el Tribunal de que la audiencia de acusación es un acto complejo.

Refirió como el nulo conocimiento en derecho de la quejosa le podía hacer pensar que como su hijo no disparó el arma de fuego, no tuvo ninguna participación y por ende, no debía ser condenado pero los que saben del tema desde luego conocen su implicación el delito fue a título de coautoría.

Indicó que una vez pasa la audiencia de acusación la Fiscalía no sólo hace una narración de los hechos sino de las pruebas que tiene pudiendo conocer cómo iba a ser el juicio porque la prueba era amplia y contundente, y los otros dos coautores aceptaron cargos, debiendo recordar que la llamada al abogado lo fue después de la realización de la diligencia.

Afirmó que sobre la pregunta de si había sido capturado en flagrancia o no, la hizo por cuanto a veces los escritos no eran completos y no lo decían.

Sobre la manifestación de la quejosa de haber sido sacada de la Sala de audiencias aseguró que en la diligencia se vio claramente como los testigos

Radicación: 2015-00360
Disciplinada: NESTOR JAIRO BETANCOURTH HINCAPIÉ

estaban coaccionados, tanto así que el Fiscal impugnó la credibilidad de los mismos con fundamento en lo que se había recaudado para la fecha de las entrevistas.

Aseveró ni en este ni en ningún otro caso llega a la audiencia de acusación con conocimiento del escrito que se va a presentar por el contrario, llega a la audiencia libre de información para empaparse de la misma en la diligencia, siendo la sentencia resultado de lo que observó en las audiencias; sin que en ningún momento hubiere visto la necesidad de declararse impedido para continuar el caso, ya que entre otras cosas, no conocía las entrevistas como tal.

Refirió no haberse declarado impedido para continuar el caso por cuanto no conocía las entrevistas como tal, su criterio no estaba comprometido; aclaró que en ese asunto había muchas pruebas en contra del procesado, incluso los otros dos coautores habían aceptado cargos.

Par finalizar, recalcó haber realizado la actuación que se le reprocha en aras de ayudar al procesado, a fin de que no se enfrentara a una pena muy grande.

3.10. El mismo 9 de marzo de 2016, se escuchó al testigo Julián Andrés Vargas Mascarín, quien manifestó tener 39 años, ser soltero y desempeñarse como Secretario del Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales, estrado judicial en el que labora desde que ingresó a la Rama Judicial, 5 o 6 años atrás.

Al preguntársele por parte del investigado, contó tener como directriz del titular del despacho estar atento a que la grabación de la audiencia se lleve a cabo en debida forma, aclarando lo que sucedía después de su culminación nada tenía que ver con el objeto del proceso.

Contó que el Juez acusado siempre les había dado instrucciones para que se apagara el audio una vez el manifestara la finalización de la diligencia y aun cuando todos los empleados del Juzgado tenían la misma directriz, lo cierto es que en algunas ocasiones el audio había quedado abierto.

Refirió que normalmente el acompañamiento a las audiencias era realizado por uno de los Oficiales del estrado judicial, siendo ese día la doctora Mónica María

Builes Naranjo quien ya no se encontraba en el Juzgado por cuanto debió regresar al despacho judicial de origen.

Sobre las sentencias manifestó que entre el juez y él como secretario se evacuaban, siendo este caso proyectado directamente por el doctor **Néstor Jairo**.

3.11. Se escuchó también a la doctora Gloria Inés Gutiérrez Aristizábal, quien dijo laborar en la Rama Judicial desde hacía muchos años, desempeñándose como Oficial Mayor del Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales del 2014 a esa fecha.

Indicó haber acompañado al Juez disciplinado a la realización de diversas audiencias del sistema oral, siendo clara la orden impartida en el sentido de cuando cerrar el audio.

De otra parte, corroboró ser usual que el titular del despacho proyectara sus propias sentencias e indicó el doctor **Néstor Jairo** era una persona conversadora pero de un trato respetuoso con los compañeros del equipo de trabajo.

3.12. Culminando los testimonios se escuchó a la señora Mónica María Builes Naranjo, quien trabajó como Oficial Mayor del Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales, de septiembre de 2014 a mayo de 2015.

Esgrimió parecerle que el funcionario judicial normalmente era respetuoso en su trato con las demás personas, manteniendo su distancia con los sujetos procesales.

El titular de despacho le dio instrucciones claras sobre el acompañamiento a audiencia; estar en la Sala de audiencias 10 minutos antes; verificar que estuviera el custodio; que sirvieran los equipos de grabación; una vez iniciada la diligencia debía grabar las audiencias desde que el doctor comenzaba con el saludo hasta que culminaba el juez con la fecha hora de la próxima audiencia o indicaba la hora de terminación de la misma.

Esbozó que lo normal era que cuando terminaba la audiencia los sujetos procesales se acercaran al estrado a hablar con el doctor **Néstor Jairo Betancourth Hincapié**, algunos de manera jocosa, de cosas personales, o del

Radicación: 2015-00360
Disciplinada: NESTOR JAIRO BETANCOURTH HINCAPIÉ

proceso, o de la vida en general, conversaciones informales, o en otras ocasiones, simplemente se daba el saludo y la despedida.

También acotó como usual que el Juez sugiriera por fuera de audiencia acogerse a los cargos cuando la prueba era abundante y contundente, siendo para el procesado una situación más favorable, con lo que nunca se había presentado inconveniente.

Al preguntársele por parte del disciplinado contestó considerar que su labor como empleada del estrado judicial fue realizada con responsabilidad, debiendo renunciar a partir del 1º de junio de 2015, al despacho por cuanto necesitaba ir de viaje a Estados Unidos y por ende, debía regresar al juzgado en el que tenía la propiedad para pedir una licencia no remunerada por un mes.

3.13. Se allegó al paginario la sentencia del 16 de mayo de 2016, por el cual la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales, confirmó en su integridad la condena impuesta a José Albeiro Agudelo Cardona, radicado No. 2014-84055-01 por los delitos de tentativa de homicidio y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Se analizó en la providencia como la retractación de los testigos palidecía frente a lo manifestado en las entrevistas realizadas por la Policía Judicial poco después de los hechos, aunado al hecho de no ser creíble que siendo conocidos e incluso familiares del joven José Albeiro Agudelo, primero lo hubieren identificado de manera clara para después decir que lo habían confundido con otra persona que finalmente no identificaron— folios 82 a 85 del c.o.-

3.14. En auto del 30 de marzo de 2017, se declaró cerrada la investigación; auto que se notificó personalmente al investigado – folios 87 y 88 del c.o.-.

3.15. En providencia interlocutoria del 7 de diciembre de 2017, se dispuso el archivo de la actuación a favor del doctor **Néstor Jairo Betancourth**, frente a la compulsa de copias que ordenó a unos testigos escuchados en el proceso penal instruido contra el joven José Albeiro Agudelo Cardona; así mismo, por la decisión de sacar de las audiencias a la señora Lina María Cardona, madre del sindicado y, por haber obligado a un testigo a asistir a las diligencias.

Radicación: 2015-00360
Disciplinada: NESTOR JAIRO BETANCOURTH HINCAPIÉ

No obstante, el análisis de las pruebas recaudadas hasta ese momento indicaron pertinente **formular pliego de cargos** por el presunto desconocimiento de la prohibición señalada en el **numeral 9º del artículo 154 de la Ley 270 de 1996**, armonizado con el deber descrito en el **numeral 4º del artículo 138 de la Ley 906 de 2004**, falta calificada como grave, cometida con culpa grave.

Providencia que fue notificada en forma personal a la quejosa, el agente del Ministerio Público y el disciplinable, quien otorgó poder al doctor César Augusto López Londoño, reconociéndosele personería para actuar en auto del 5 de febrero de 2018 – folios 91 a 98, 100, 101, 103 y 105 del c.o.-

3.16. En escrito de descargos se arguyó por parte de la defensa no existir ninguna violación al deber relacionado con guardar la reserva de los asuntos relacionados con su función.

Afirmó las manifestaciones realizadas por el doctor **Néstor Jairo Betancourth** fueron efectuadas después de terminada la diligencia de formulación de acusación del 26 de febrero de 2015, al interior del proceso No. 2014-84055 adelantado contra el joven José Albeiro Agudelo Cardona; tratándose de un dialogo corto con el defensor Vidal Cardona Echeverri, que refirió temas que acaban de verse en la diligencia, como el descubrimiento probatorio que conforme el artículo 337 del C.P.P. y el art. 344 debía ser formalizado en dicha audiencia.

Continuó el doctor César Augusto López preguntándose: si el descubrimiento probatorio realizado por la Fiscalía en la audiencia de formulación de acusación estaba sometido a reserva legal?; adicionalmente si la diligencia como tal estaba sometida a reserva, de manera que una vez celebrada todo lo allí acontecido debiere someterse a reserva, hasta el punto que los asistentes a la misma no pudieren hablar sobre ella. Además en qué norma se encontraba dicha reserva y si la misma podía levantarse en algún momento.

Refirió no podía desconocerse que conforme el numeral 4º del artículo 138 del C. de P.P. debía observarse la reserva legal, por ejemplo, en la indagación e investigación adelantada por los miembros de la policía judicial, en las audiencias preliminares, audiencias de control de legalidad sobre allanamientos, registros, interceptación de comunicaciones, vigilancia y seguimiento de personas y cosas,

Radicación: 2015-00360
Disciplinada: NESTOR JAIRO BETANCOURTH HINCAPIÉ

entre otras; mismo sigilo que se exige a los Fiscales que intervienen en dichas etapas y a los jueces de control de garantías.

Empero, la etapa de juzgamiento se encuentra regida por el principio de publicidad (art. 250, numeral 4º del C.P., desarrollado en el art. 149 del C.P.P.), salvo las limitaciones que trae la misma normatividad por motivos de orden público, seguridad o respeto a las víctimas menores de edad, motivos de interés de justicia y por la necesidad de proteger la imagen de los testigos (art's. 150 a 152 A del C.P.P.).

Explicó brevemente la publicidad del descubrimiento probatorio de la Fiscalía pues la misma se le da a conocer a la defensa, el representante de víctimas y el Ministerio Público – incluso a la Defensoría de Familia, en ciertos casos –; ocasión en la que el Juez puede ordenar a la Fiscalía entregar copia de los elementos probatorios descubiertos a la defensa.

En consecuencia, el descubrimiento probatorio no estaba sometido a ninguna clase de reserva legal; la audiencia de formulación de acusación tampoco tenía restricción en ese sentido, al tratarse de una audiencia realizada en la etapa de juzgamiento, por lo que podía ser pública.

En dicha diligencia no se había impuesto ninguna limitación al principio de publicidad que regía la diligencia por no encontrarse en ninguno de los casos claramente delimitados por las normas, era apenas una audiencia de formulación de acusación en la cual no se practican prueba, estando completamente vigente el principio constitucional y legal de publicidad.

De suerte que, en su concepto *"sería una verdadera enormidad predicar que cuando, después de haber sido cerrada esa diligencia, el Dr. NÉSTOR JAIRO BETANCOURTH HINCAPIÉ mantuvo la conversación con el Dr. VIDAL CARDONA ECHEVERRI enantes reproducida, estaba violando flagrantemente el deber de "guardar reserva sobre los asuntos relacionados con su función", cuando tal es la consecuencia de la plena publicidad que amparaba la diligencia.*

Aseguró, así hubiere existido la restricción legal, ese breve diálogo jamás podía estimarse como una violación de la reserva legal, al no tratarse de persona extraña al proceso, era un sujeto procesal, nada más que el representante judicial

del enjuiciado. *"Pregonar lo contrario – y lo digo con todo respeto – sería ya un total despropósito".*

De lo anterior concluyó, no había mandato legal que obligara al disciplinable a guardar reserva legal sobre lo acontecido en la audiencia de formulación de acusación tantas veces mencionada, por ende, jamás pudo incumplir el deber previsto en el artículo 4º del artículo 138 del C. de P.P., siendo en su concepto absolutamente atípica la conducta; *"por más que se amplíe, ensanche, dilate y estíre el supuesto de hecho de dicha disposición, será absolutamente imposible de encuadrar su actuación dentro de tales confines normativos".*

"Se trata de una atipicidad objetiva frente a esta rama del Derecho Penal Administrativo – o si se quiere, Derecho Administrativo Sancionador-.

En cuanto a la supuesta violación de la prohibición consagrada en el art. 154, numeral 9º, reseñó no pudo existir ninguna opinión constitutiva de prejuzgamiento pues, la corta conversación se refirió al descubrimiento probatorio, en esa medida situaciones acaecidas dentro de la audiencia.

Transcribiendo apartes del dialogo sostenido entre el Juez y el abogado Vidal Cardona indicó si bien no podía negarse que la prohibición contenida en el numeral 9º del art. 154 de la Ley 270 de 1996, tenía inmerso un prejuzgamiento, este último implica un concepto serio; no una simple broma, como acaeció en el caso concreto.

Continuó indicando el prejuzgamiento debía ser sustancial, vinculante y de fondo que no puede derivarse de una simple charla informal. *"Y tuvo que ser así porque ningún Juez Penal del Circuito que deba adelantar el juzgamiento y fallo de un caso por homicidio agravado, se atrevería a "expresar", en presencia del defensor del acusado, con un lenguaje que pudiera ser tomado como expresión de una "opinión" seria y formal, semejante apreciación sobre las probables resultas de la causa que debe decidir".*

Agregó, prueba de la informalidad de las expresiones lanzadas por el doctor **Néstor Betancourth Hincapié** es la actitud asumida por el defensor del joven implicado, quien de haber sido una opinión vinculante no hubiera dudado en recusar *"al osado servidor judicial con apoyo en la causal de impedimento prevista*

Radicación: 2015-00360
Disciplinada: NESTOR JAIRO BETANCOURTH HINCAPIÉ

en el numeral 4º del art. 56 del C. de P. Penal”, siendo palmario que el abogado Cardona Echeverri tomó las expresiones del Juez como una broma o chanza.

Resaltó existía riesgo cuando el Juez insinúa o expresa una opinión respecto del asunto llamado a fallar con seriedad, contrariado o molesto pues, ese disgusto, posiblemente se verá plasmado en una sanción más drástica, pero, este no era el caso; y ello podía concluirse de sólo observar la sentencia dictada por el disciplinable el 6 de junio de 2015, que condenó al joven José Albeiro Agudelo Cardona a la pena principal de 20 años de prisión, por los delitos de homicidio tentado y porte ilegal de armas de fuego agravado.

En dicha providencia, no se realizó el mayor incremento a la pena impuesta; de suerte, que de haber querido el fallador la condena podría haber sido mucho mayor pues así lo permitía el artículo 31 del Código Penal.

Incluso la sentencia fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior, con ponencia de la doctora Dennys Marina Garzón Orduna, el 16 de mayo de 2016, providencia frente a la cual se interpuso el recurso extraordinario de casación, que fue inadmitido por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal el 28 de septiembre de 2016.

Consideró entonces no podía hablarse de ninguna “ilicitud sustancial”, ni incidencia en las resultas del proceso, pues los recursos interpuestos lo que evidenciaron fue que el doctor **Néstor Jairo Betancourth** “*obró con estricta sujeción a la ley y su fallo quedó, al final, irreversiblemente amparado por la “doble presunción de acierto y legalidad”*”.

El funcionario investigado ni trató de imponer al abogado Vidal Cardona el allanamiento a cargos que mencionó en la conversación ni plasmó en su sentencia alguna determinación que evidenciara disgusto o molestia por la respuesta negativa del defensor ante su frase.

“Por cierto: en la vida judicial de una ciudad como Manizales, es común que un Juez Penal del Circuito y un abogado litigante, después de cerrada una audiencia pública, como una de formulación de acusación, tengan una conversación informal y que, en el curso de la misma, exterioricen bromas o chanzas o se hagan chistes”.

De ahí que en su criterio resulta exagerado dar repercusiones disciplinarias a la informal conversación que se presentó entre el Juez investigado y el abogado Vidal Cardona, *"descalificaciones así implican limitar seriamente la interacción entre personas que hacen parte del Sistema Penal, cuyas relaciones no necesariamente tienen que ser verticales, distantes, tensas y desafiantes"*.

Prosiguió explicando con la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004 se implantó un sistema penal acusatorio en el que impera el llamado derecho penal premial, siendo muy común la aceptación de cargos y los preacuerdos - referentes a la justicia consensual-. De manera que en la práctica *"se ha vuelto costumbre que Fiscales y defensores acudan ante el Juez de Conocimiento – bien individual o conjuntamente – a consultarlo sobre la posibilidad de llegar a un preacuerdo en el proceso que está a su cargo y en el cual actúan como sujetos procesales. O que sea el propio Juez de Conocimiento quien aconseje o recomiende o insinúe a los sujetos procesales e intervinientes a suscribir un preacuerdo o incluso inste a la defensa a un allanamiento a cargos – con total complacencia de la Fiscalía –"*.

"En esos casos, las intervenciones de los jueces o sus apreciaciones en momento alguno son tomadas por sujetos procesales e intervinientes como intolerables intromisiones en su libertad de actuación procesal y menos como descarados prejuizgamientos.-"

La finalidad del derecho penal premial es humanizar la actuación procesal y la pena; obtener pronta y cumplida administración de justicia; activar la solución de conflictos sociales; propiciar la reparación integral de los prejuicios ocasionados con el injusto y lograr la participación del imputado en la definición de su caso, pudiendo realizarse preacuerdos con la Fiscalía que implicaran terminación del proceso (art. 348 del C. de P.P.).

Y aunque previó se le replicaría por esta Sala que los jueces de conocimiento eran ajenos a las conversaciones entre Fiscalía e imputado para llegar a aceptación de cargos y/o preacuerdos, lo cierto es que en la práctica judicial es cada vez más frecuente que los sujetos procesales – incluso los intervinientes – *"quieran obtener siquiera una señal por parte del Juez de Conocimiento para proceder a firmar un preacuerdo"*.

Radicación: 2015-00360
Disciplinada: NESTOR JAIRO BETANCOURTH HINCAPIÉ

Siendo común que los defensores o acusados en etapa de juzgamiento terminaran atendiendo el consejo, recomendación o sugerencia del Juez de Conocimiento en punto a acogerse a la solución favorable de una aceptación de cargos, que implica un muy significativo premio punitivo – rebaja de la tercera parte de la pena a imponer-.

En cuanto a la calificación de la falta refirió el profesional del derecho si bien se calificó la falta como grave y cometida con culpa grave, en su concepto no podía obedecer ni a lo uno ni lo otro, pues ninguna reserva se debía guardar ni un prejuizgamiento podía configurarse, siendo evidente que las manifestaciones no tuvieron repercusión alguna en el fallo. En consecuencia, pidió la absolución de su cliente.

Por último con su escrito solicitó la práctica de pruebas, mismas que fueron decretadas en su totalidad, mediante auto del 22 de febrero de 2018 – folios 113 a 150 del c.o.-

3.17. Con Oficio No. 342 del 5 de abril de 2018, la Secretaria Ad Hoc del Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales, allegó copia auténtica de la sentencia de segunda instancia y la actuación surtida ante la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en donde mediante auto del 28 de septiembre de 2016 se inadmitió el recurso extraordinario de casación al interior del proceso penal No. 2014-0084055 seguido contra el ciudadano José Albeiro Agudelo, al considerar *“el discurso de la defensa no es suficiente para controvertir el fallo impugnado ni tampoco para demostrar algún error de trámite o juicio”*. – folios 165 a 207 -.

3.18. La Presidenta del Tribunal Superior de Manizales, certificó en dicha corporación no existían quejas o denuncias de usuarios de la administración de justicia contra el doctor **Néstor Jairo Betancourth Hincapié**, en condición de Juez Séptimo Penal del Circuito de Manizales, por prejuizgamiento y/o expresar o insinuar privadamente su opinión sobre un asunto que estuviere llamado a fallar – folio 210 del c.o.-

3.19. La Presidenta del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, allegó copia de la calificación integral de servicios otorgadas al disciplinado de los años 2012 a 2016, siempre obteniendo un puntaje superior a 91, rango de excelencia – folios 213 a 216 del c.o.-

2.21. El día 21 de mayo de 2018, se escucharon los testimonios de los doctores:

- Mariano Ospina Vélez, Fiscal Segundo Especializado ante el Gula, Caldas, refirió parecerle el juez es imparcial, profesional, íntegro, sin ánimos de protagonismo, disciplinado en los horarios, hace respetar las audiencias, la ley y la dignidad de la administración de justicia. En su concepto el funcionario dirige las audiencias con las instrucciones pertinentes, "lo que queda en las audiencias, allí queda en las audiencias, en los debates".

Esbozó tener una amistad "normal" con el disciplinable, asegurando jamás había tenido inconveniente alguno ni dentro ni fuera del despacho; sabiendo que el doctor **Néstor Jairo** mantenía el control de las diligencias, interviniendo cuando se presentaba alguna controversia conceptual entre la defensa y el ente acusador.

Explicó en el Departamento de Caldas, la relación entre jueces, abogados litigantes y Fiscales, se caracteriza por ser muy cordial, pero con total respeto de los roles de cada uno. *"En lo que respecta a mi actividad puntual, nunca he recibido una insinuación puntual del señor Juez Néstor Jairo, y que haya escuchado de alguna de las partes con las cuales he interactuado, tampoco, la relación ha sido muy cordial pero siempre con el respeto a la dignidad que representa el señor Juez con su toga"*.

Eventualmente hacen consultas ante el Juez sobre la viabilidad de seguir determinado camino jurídico, obteniendo como respuesta, por ejemplo, del doctor Mauricio (Juez Penal) que, debía proponerse en la audiencia para discutir el tema; con el doctor **Néstor Jairo**, le sucedió una vez en la que tenían un caso del frente Cacique Pipintá, sin que se presentara cambio de posturas de unos u otros.

Precisó si bien no era frecuente que terminada la audiencia se hablara de lo sucedido en el caso o el acusado, tampoco podía predicarse como un acontecimiento exótico, sin que ello diera cuenta de influencia alguna de las partes en el juez o al contrario.

Contestó en su presencia, no vio al Juez Séptimo Penal del Circuito acá investigado, intentado imponer su criterio o insinuando la aceptación de cargos, siendo por el contrario muy respetuoso de los criterios.

Radicación: 2015-00360
Disciplinada: NESTOR JAIRO BETANCOURTH HINCAPIÉ

Expresó en su criterio no era lícito que el juez insinuara, dijera o impusiera a alguna de las partes para que el sindicato aceptara cargos, pero sí podía el Juez llamar a las partes al estrado para escuchar criterios y dar recomendaciones que las partes podían o no acatar.

- Mauricio Vidal Bedoya, Juez Penal del Circuito Especializado de Manizales, refirió en su praxis judicial es muy común que las partes dentro o fuera de audiencia planteen la posibilidad de preacuerdos, por lo que sin entrar en asesoramiento él los escucha y, en algunos casos les recuerda los precedentes jurisprudenciales, sin decir si sí o no se puede hacer “x” o “y” circunstancia, con el fin de evitar dilaciones pues la realidad demuestra que la demanda de justicia desborda la capacidad de respuesta del aparato judicial, por tanto, sí se hace necesario plantear ese tipo de alternativas.

Adicionó en Caldas es normal esa situación, proceder que no se repite con los Fiscales o abogados defensores foráneos.

Contó una vez ingresó al sistema, fue renuente a escuchar a las partes por fuera de audiencias, encontrándose que a veces llegaban planteando unos acuerdos impensables, por lo que él se limitaba a negarlo, que se apelara, fuera a segunda instancia, con la consecuencia de que el proceso se dilataba mucho.

El sistema está diseñado para que ese tipo de iniciativas surjan de las partes y no del juez, pero en lo que llama la Corte Constitucional el derecho viviente, esto es, lo que se vive a diario en los Juzgados, creía que sin asesorar, sugerir y/o presionar, el juez sí debía ser un poco activista en eso. Recordó en el curso de formación judicial, en la parte de dirección temprana del proceso, indicaba que además de ser facultades del Juez, el manejo del tiempo, la organización, el manejo de las audiencias, también la posibilidad de dar terminación anticipada de los procesos, reconociendo que es una situación que se observa más fácil de implementar e inclusive es obligatoria en la jurisdicción laboral o civil frente a la conciliación.

Refirió la práctica también enseñaba que sin hablar de un prejuzgamiento había casos en los que siendo varios sindicatos, si ya se habían realizado diversos preacuerdos o allanamientos a cargos, podía darse una idea de la suerte que

correría el sindicado restante, siendo el escrito de acusación un diagnóstico muy claro del futuro de la persona procesada; *"en principio toda acusación sí es un juicio"*, por lo que en su concepción personal cree el juez sí debe poder inmiscuirse un poco más.

- Anny Molina Patiño, Procuradora Judicial 108 Judicial en lo Penal II, quien refirió llevar más de 10 años en diferentes roles al interior del sistema penal acusatorio, sin que hasta el momento hubiere visto que por iniciativa del Juez se estimulara la realización de un preacuerdo, negociación o aceptación de cargos, recordando que los primeros eran facultades de la Fiscalía y la defensa y la última es una manifestación libre y voluntaria que hacía el sindicado o acusado.

Manifestó dentro se carga laboral se le asignó el asistir a audiencias ante el Juez Séptimo Penal de Conocimiento aquí acusado, conociendo se trata de un juez completamente respetuoso de las partes, al que nunca había visto imponer su posición o criterio.

Al preguntársele si tenía el Juez del sistema penal acusatorio algún tipo de iniciativa para promover que se buscara un acuerdo, negociación, preacuerdo, aceptación de cargos, etc... Contestó en su experiencia no había visto el caso pues generalmente la iniciativa era de la Fiscalía o defensa, incluso por lo general el documento ya venía elaborado pues se hacían en el despacho del Fiscal y a la audiencia ya acudían con él listo para que el Juez los avalara.

Lo que sí había visto era que los abogados se acercaban al Juez **Néstor Jairo** para solicitarle un aplazamiento a fin de realizar un preacuerdo o negociación con la Fiscalía, pero no que el Juez los propusiera.

Expresó en su concepto cuando el Juez simplemente decía si el preacuerdo o negociación era procedente o no, no debía el juez apartarse del conocimiento del asunto, dependiendo en cada caso de que tanto hubiere conocido los elementos materiales probatorios.

Agregó para finalizar que el Juez era una persona muy respetuosa de la que únicamente se podía criticar su excesiva rigurosidad con el cumplimiento de los horarios, lo cual en su concepto incluso era necesario para que el sistema penal

Radicación: 2015-00360
Disciplinada: NESTOR JAIRO BETANCOURTH HINCAPIÉ

pudiere funcionar. Precizando en ese despacho no se había presentado ningún inconveniente.

- Rafael Mejía Guevara, abogado litigante, graduado de la Universidad de Caldas y con especialización entre otras, en juzgamiento del sistema penal acusatorio.

Manifestó conocer al disciplinado desde el pregrado en la Universidad de Caldas, interviniendo en infinidad de procesos en los que ha presidido como Juez el doctor **Néstor Jairo Betanourth**, teniéndolo en alto concepto frente a la disciplina y el desarrollo de las audiencias, ejerciendo un control absoluto sobre la actividad de los sujetos procesos, sin limitar o impedir el total despliegue y respeto por sus derechos y garantías, sólo que “con él las cosas marchan a un ritmo distinto”, debido a lo estricto que es.

Empero manifestó sentirse confiado en la justeza de sus decisiones pues, tenía buen criterio ya fuere para absolver o condenar, permitiendo los recursos de ley.

En el desarrollo de la audiencia no existía ningún tipo de cercanía con los sujetos procesales, pero fuera de ella el doctor **Néstor Jairo** era un poco más accesible, incluso se podía bromear con él y aunque a veces entre los litigantes y funcionarios se puede compartir un café, tienen como regla de oro no comentar los casos.

No obstante en la parte penal es usual abordar al Fiscal para plantear soluciones al problema jurídico, incluso el mismo Fiscal puede plantear salidas a la defensa. Agregó en su práctica judicial muchas veces había recibido manifestaciones de los Jueces sobre la posibilidad de aceptar cargos, situación que nunca ha visto con perversión sino como una forma de depurar su técnica en la presentación del caso, pues lo cierto es que la información que se da tanto en las audiencias preparatorias como en la de formulación de acusación ya permiten perfilar hacia donde va el caso, indicó si bien tomaba el comentario para repensar lo planteado, lo cierto es que por lo general ello no variaba lo trazado pues cuando iba a un juicio oral era porque tenía el alto convencimiento de poder discutir la responsabilidad de su prohijado, a menos que los clientes a sabiendas de no tener elementos, insistieran en irse a juicio, entre otras situaciones que se podían presentar.

Contó al interior de la academia se debatían mucho las falencias del sistema penal acusatorio, tales como, que el juez de la audiencia de acusación y de la audiencia preparatoria fuere un juez distinto del juicio, pues en los dos primeros momentos es mucha la información que se podía obtener.

Para finalizar afirmó el doctor **Néstor Jairo**, nunca le había hecho ningún tipo de manifestación, ni insinuado o impuesto su criterio jurídico.

- Julián Andrés Vargas Mascarín, Secretario del Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales, quien conoce al disciplinado desde el año 2012, que labora con él.

Por sus labores de Secretario no acompaña al Juez a las audiencias y por ello no podía dar fe de lo sucedido en las mismas pero, sí del trato que el disciplinado prodigaba a abogados y público en general, el cual era cordial; como jefe, estricto en cuanto al horario y el cumplimiento de las labores; no obstante, mientras todo se hiciera conforme los lineamientos por él impartidos no se presentaban problemas.

Sabía que el doctor Vidal Cardona era un defensor público pero no conocía qué tipo de vínculo o relación tenía con el juez investigado.

Contestó en las experiencias que ha tenido la oportunidad de desempeñar cargos de Juez del sistema penal acusatorio, sí era frecuente que los abogados y a veces hasta los mismos procesados le preguntaran al Juez sobre un allanamiento a cargos, como queriendo saber si la situación era desfavorable.

- Mónica María Builes Naranjo, quien laboró como Oficial Mayor de septiembre de 2014 a 31 de mayo de 2015. Desde su grado ha laborado en diferentes cargos relacionados con el sistema penal acusatorio.

Al preguntársele contestó el día de la audiencia que se investiga, se le quedó el audio abierto, tal vez mientras estaba haciendo el acta pues había que ser muy diligente para que no se le acumulara el trabajo. No obstante, manifestó lo sucedido en ese momento fue algo normal en el medio, incluso en el juzgado de control de garantías que trabajaba en ese momento se preguntaba si se iban a

Radicación: 2015-00360
Disciplinada: NESTOR JAIRO BETANCOURTH HINCAPIÉ

aceptar cargos o no, entre otras situaciones que se comentaban después de audiencia, siendo en su sentir algo muy normal.

Agregó incluso dentro de las audiencias era normal decirle al imputado cuál era el delito por el que estaba investigado y cuáles las consecuencias jurídicas del mismo.

Sobre el doctor Vidal Cardona manifestó saber que era un defensor público que con alguna frecuencia acudía al despacho, siendo normal que las partes antes o después de audiencia hablaran.

Finalmente, expresó el doctor **Néstor Jairo** al interior del trabajo era una persona estricta y disciplinada pero fuera del mismo era jocoso, tenía cercanía con algunas personas; "bien, chévere, formal".

- David Augusto Becerra, abogado litigante especializado en derecho penal, conociendo al investigado desde el año 2000 en su faceta civil, a partir del año 2005 lo conoció profesionalmente porque empezó a litigar y el doctor **Néstor** ya era Juez especializado, resaltando el funcionario tenía muy clara su faceta funcional y en esa medida era un juez director de audiencia que por tener una metodología muy clara no dejaba salir de control la diligencia, siendo absolutamente estricto y rígido en el cumplimiento de su papel, todo ello sin ser autoritario, ni restar el garantismo propio de la misma.

En el trato personal y su comportamiento social "es un excelente tipo", aunque es psicorígido, también es muy chévere; no obstante su forma de ser absolutamente estricta no le permiten hablar por fuera de audiencia sobre los procesos, y aunque en el sistema penal acusatorio casi que es tradición salir de audiencia e ir a tomar un café con Procurador, Juez, Defensa y Fiscal, el doctor **Néstor Jairo** no sale con ellos, tal vez en otros momentos pero no después de diligencias.

Acotó tenerlo en el concepto de un gran juez, siendo independiente el resultado jurídico del asunto.

Contó en su experiencia profesional trataba de consultar al Juez cuando existía un acuerdo con la Fiscalía para que no fuere a invalidar el mismo. Agregó en su

criterio personal una iniciativa del Juez antes del juicio oral no constituye ningún problema pues la intermediación de las pruebas se da es en la etapa del juicio oral.

- Antonio Toro Ruíz, Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales, frente a la labor del doctor **Néstor Jairo Betancourth**, refirió es uno de los funcionarios de mostrar, "da gusto revisarle sus providencias", le da confianza a las partes porque saben sus decisiones van a ser en derecho, no trabaja con apasionamientos, todo ello evidenciado al revisarle sus providencia en segunda instancia.

Frente al manejo de las audiencias "siempre lo ha hecho correctamente", conoce el procedimiento, lo maneja y lo sabe direccionar. Hacía unos seis años atrás era muy severo, muy rígido en su trato, el Tribunal le llamó la atención y en adelante es más llevadero, más tranquilo, sin dejar de ser estricto.

Afirmó no existen normas procesales que permitan la intervención del Juez en cuanto a proponer fórmulas de arreglo, no obstante, la realidad fue indicando en razón de la congestión judicial, la necesidad de negociar, pues no hacía parte de la esencia del sistema penal acusatorio que se caracteriza es por ser garantista, de partes, en el que el Juez es un tercero imparcial, en el que se da la igualdad de partes y beneficios o prerrogativas para ambas.

Sin embargo, el sistema se montó en Colombia con la idea de que sólo llegaran a juicio el 10% de las imputaciones pues siendo Colombia un país tan conflictivo se hizo un incremento de penas exorbitantes con el fin de que los procesados negociaran o se allanaran a cargos, de tal manera que la negociación es una figura a surtir entre el Fiscal y procesado. Antes se instaba al Juez a buscar fórmulas de conciliación.

Posteriormente, vinieron una serie de reformas con las que se quitaron esos premios y quedó para negociar muy poco, es decir, pocos los delitos que permitían hacer acuerdos o negociaciones, de manera que la gente prefiere irse a juicio y ello tiene a la Fiscalía "reventada" y los Juzgados con alta congestión.

El Distrito Judicial de Caldas se caracteriza por tener una justicia pronta, aunque a veces un poco retardada, pero no con decisiones pasionales o corruptas, "puede que se equivoquen pero no hay mala fé", teniendo conocimiento por lo que se

Radicación: 2015-00360
Disciplinada: NESTOR JAIRÓ BETANCOURTH HINCAPIÉ

habla en encuentros de la Jurisdicción, entre otros, que los Jueces a veces por fuera sugieren a ver si el Ministerio Público interviene porque alcanzan a ver el probable resultado del proceso y por ello tratan de que se llegue a un arreglo.

Comentó saber que en el sistema había mucho colegaje, por lo que algunos Fiscales les planteaban el tema a los jueces, algunos defensores también se acercaban a preguntar al Juez si veían posibilidades, momentos en los cuales los jueces con mucha más cautela indican que es de su esfera y deben revisarlo; sin embargo ello no sucede en todos los casos ni se hace con todos los defensores y/o Fiscales.

Al preguntársele por la defensa, indicó no haber visto al doctor **Néstor** imponer su criterio jurídico.

3.22. El día 12 de junio de 2018, se continuó escuchando al doctor Vidal de Jesús Cardona Echeverri, abogado litigante, apoderado del sindicado Luis Albeiro Agudelo en el proceso penal objeto de este asunto disciplinario.

Repitió en ningún momento se sintió coaccionado o presionado psicológicamente por los comentarios del disciplinable, con quien tiene una amistad de muchos años; hace más de 20, cuando junto al doctor José Hernando Jiménez García, su ex jefe en la Procuraduría General de la Nación, compartían tinto y conversaciones en las siempre fueron usuales las chanzas pesadas del doctor **Betancourt Hincapié**, razón por la que lo sucedido no afectó para nada la dinámica del proceso ni su trabajo como abogado defensor.

Al preguntársele si consideraba la pena emitida al joven José Albeiro Agudelo fue excesiva, contestó que no, incluso contó desde el principio aconsejó a su cliente aceptar los cargos y con ello obtener el beneficio ofrecido por la Fiscalía de que la pena quedara en 10 años, al cual se iban a acoger dos de los sindicatos aceptando cargos.

No obstante, el joven Agudelo Cardona decía no aceptar los cargos porque su mamá insistía que el día y hora de los hechos estaba en la casa durmiendo.

Sobre su escrito de apelación, en el que manifestó el Juez no apreció adecuadamente las pruebas de la defensa, contestó en el caso sucedió algo muy

particular y es que los testigos de la Fiscalía cambiaron su versión a favor de su prohijado, hecho que no fue creíble para el juez y por ello consideró adecuado erigir su escrito de apelación por ese lado, sin que ello implicara nada personal o el querer insinuar un irrespeto a las garantías por parte del Juez.

Seguidamente la defensa preguntó si el juez investigado interrumpió los interrogatorios cruzados que se efectuaron en la audiencia, respondiendo que nunca lo hizo, agregando el doctor **Néstor Jairo**, era una persona muy respetuosa de las partes.

- Para concluir se escuchó en ampliación de queja a la señora Lina María Cardona, contando haberse enterado de las manifestaciones del Juez porque pidió al abogado Vidal Cardona copia de los videos para revisarlos. Y aunque de inmediato pidió al doctor Vidal Cardona meterse por ahí para fundamentar la apelación, pues evidentemente el juez había condenado a su hijo antes de emitir la sentencia, el profesional del derecho se negó argumentándole dicha conversación había sido de amigos; manteniéndose el letrado en esa posición pese a que ella le insistió.

Refirió cómo eso nunca le había pasado con su hijo, ella no sabía que debía hacer, apenas días antes de acudir a ampliar la queja, le dijeron en la Procuraduría que el doctor Vidal Cardona habría podido recusar al Juez, también en la Defensoría le indicaron que eso podía ser un prevaricato y que debía denunciarlo ante la Corte Suprema de Justicia, lo que en efecto hizo, informándosele debía esperar a que la llamaran.

3.23. A folio 244 del c.o. obra certificación del Secretario de esta Sala, fechada 13 de junio de 2018, en la cual informó qué: revisado el sistema de información Siglo XXI encontró los últimos 5 años se adelantaron los siguientes procesos disciplinarios en contra del doctor **Néstor Betancourth** Nos. 2012-00350, 2012-00464, 2013-00542 y 2014-00069, todos ellos terminados con decisión de archivo.

Revisados físicamente se pudo constatar el radicado No. 2014-00069 inició por queja de las señoras María Hernández de Gómez y Olga Patricia Gómez Hernández, quienes indicaron su descontento no obedecía al proferimiento de una sentencia condenatoria contra un pariente sino debido al *"...trato inmisericorde con que lo trató a él después del veredicto y como nos trató a todos los familiares"*.

Radicación: 2015-00360
Disciplinada: NESTOR JAIRO BETANCOURTH HINCAPIÉ

"Este Juez luego de emitir el sentido del fallo, trató muy mal a nuestro hijo y lo amenazaba, igualmente hizo esto en la lectura de la sentencia considerando que eso no es normal, porque al ofenderlo, pareciera que tomaba algún partido en este caso donde el Juez debe caracterizarse por su neutralidad. Igualmente a nosotros nos trató muy mal y nos impidió entrar a la lectura de sentencia, simplemente porque no le caía bien el acusado".

"Es también mal hecho que un testigo de 10 años de nombre Juan Sebastián Fuentes Gómez, antes de rendir declaración se entró al cuarto donde estaba el menor con la defensora de Familia y lo amenazó airadamente con enviarlo a Bienestar Familiar si mentía, asustándolo de tal forma que lo hizo llorar..."

"Se nos ha informado que no sólo pasa esto con nosotros, sino que a todo el mundo trata mal y nadir (SIC) se atreve a quejarse, por lo que ruego se le ponga atención a este caso y se den las sanciones pertinentes"

Después de recaudadas las pruebas se profirió providencia de archivo definitivo, el 15 de junio de 2015, al considerar el juez se limitó a exponer las prevenciones de ley, siendo el desconocimiento de las quejas lo que las llevó a tildar de inadecuada la conducta - folio 1 a 3 y 68 a 74 del expediente No. 2014-00069 –

3.24. Corrido el traslado para alegar de conclusión indicó el doctor César Augusto López, los argumentos que expuso en el escrito de descargos fueron corroborados por los testigos, doctores Antonio Toro Ruíz, Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, Mauricio Bedoya Vidal, Juez Penal del Circuito Especializado de Manizales, Mariano Ospina Vélez, Fiscal Segundo Penal Especializado (Gaula) y los litigantes Rafael Mejía Guevara y David Augusto Becerra Herrera, todos especialistas en el área penal.

Refirió con los mismos declarantes se podía concluir que el nuevo sistema penal acusatorio en búsqueda de la verdad material había creado una serie de figuras jurídico – procesales: "aceptación de cargos" y "preacuerdos" que en el derecho penal premial permitían una comunicación fluida entre *"Fiscales, apoderados de víctimas, Agentes del Ministerio Público, defensores e incluso Jueces de la República en este Distrito Judicial, lo que en momento alguno se ha advertido*

Radicación: 2015-00360
Disciplinada: NESTOR JAIRO BETANCOURTH HINCAPIÉ

como un actuar corrupto o corruptor por parte de sujetos procesales o de los intervinientes o un prejuzgamiento por parte del Juez de Conocimiento”.

Resaltó lo dicho por el doctor Mauricio Bedoya Vidal, frente al papel activista que debía tener el Juez, incluso proponiendo a la Fiscalía o al defensor la búsqueda de preacuerdos o aceptación de cargos. Asegurando el doctor Bedoya la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, *“en los cursos de capacitación instaba a los Jueces Penales a evitar, en la medida de lo posible, que los procesos que lleguen a su conocimiento, se vayan a juicio”.*

Por su parte, el doctor Antonio Toro Ruíz, refirió como en este Distrito Judicial ha hecho carrera la promoción por parte de los Jueces el que se llegue a preacuerdos o negociaciones entre Fiscales y Defensores; lo que no convertía a los funcionarios en corruptos; siendo evidente que la justicia en Manizales tenía prestigio por ser correcta y pronta, *“a veces un poquito retardada”*; no obstante, cuando surgía una equivocación no era de mala fe.

Esgrimió esa *“promoción de allanamiento a cargos o preacuerdos por parte de los Jueces Penales nunca ha sido tomada por los Fiscales o defensores como un prejuzgamiento o una invitación non sancta o una solución apresurada del asunto para no llegar a un juicio oral”*, como se pudo corroborar con la declaración del Fiscal Segundo Especializado (Gaula), doctor Mariano Ospina Vélez y los litigantes Rafael Mejía Guevara y David Augusto Becerra Herrera.

Si bien los especialistas en temas penales, manifestaron no tratarse de una situación común, lo cierto es que no se toma a mal pues, por el contrario, ello permite depurar cosas.

Consideró entonces la defensa ninguna preconcebida actitud anímica negativa puede residenciarse en cabeza del doctor **Néstor Jairo Betancourth** frente a la suerte procesal del joven José Albeiro Agudelo Cardona.

Resaltó incluso la actuación del operador judicial no podía tomarse como absolutamente inusual o extravagante o constitutiva de una conducta autoritaria o despótica impropia en un Juez de la República, siendo evidente que las insinuaciones del disciplinado no tuvieron ninguna incidencia en el proceso penal pues como se corroboró con el fallo de segunda instancia y el posterior recurso de

Radicación: 2015-00360
Disciplinada: NESTOR JAIRO BETANCOURTH HINCAPIÉ

casación, que se inadmitió, el doctor **Néstor Jairo** obró con estricta sujeción a la ley y su fallo quedó, al final, irreversiblemente amparado por la "doble presunción de acierto y legalidad".

Recordó conforme el testimonio del abogado Vidal Cardona eran comunes las charlas pesadas con el Juez, a quien conocía desde hacía muchos años, por tanto, la conversación sostenida, en ningún momento afectó su actuación en el juicio oral ni lo afectaron psicológicamente; ratificando el testigo lo que enunció en sus escritos de descargos, de haberse tratado de una simple charla, broma o chanza. Comentarios que ningún juez de la república podría haberlos hecho en otro contexto, prueba de ello es que el doctor Vidal Cardona en ningún momento recusó al juez investigado.

De suerte que la conducta desplegada por el doctor **Néstor Jairo Betancourth** no cumple con los parámetros descritos en la norma, debiendo absolversele - folios 247 a 283 del c.o.-

3.25. Finalmente de los folios 284 a 288 del c.o. obra pronunciamiento del doctor Jaime Enrique Montoya Marín, Procurador 107 Judicial Penal, quien igualmente conceptuó debía absolverse al disciplinado pues no hubo efectiva afectación de la función judicial.

"En otros términos, aun cuando la conducta se encuadre en la descripción típica, jurídica, ello no puede ser objeto de imposición de una sanción disciplinaria, porque se constituiría en responsabilidad objetiva, al aplicarse medidas sancionatorias, sin que exista una verdadera y justa razón de ser".

Así lo expresó el doctor Alejandro Ordoñez Maldonado, en Justicia Disciplinaria. De la ilicitud sustancial a lo sustancial de la ilicitud, IEPM, 2009, Página 27: *"En una palabra, aunque el comportamiento se encuadre en un tipo disciplinario, pero se determine que el mismo para nada incidió en la garantía de la función pública y los principios que la gobiernan, deberá concluirse que la conducta está desprovista de ilicitud sustancial".*

Arguyó atendiendo que en el caso concreto faltaba todo un debate probatorio por surtir, las palabras del Juez no podían tomarse como un prejuizgamiento en sentido legal, siendo evidente que la apreciación del Juez lo que procuraba era un

mejor final para el encartado, sin que por ello se limitara la decisión a adoptar una vez evacuadas las restantes audiencias.

Las pruebas practicadas demostraron que el doctor **Néstor Jairo Betancourth** no tuvo el ánimo de infringir la norma pues, por el contrario se demostró que su actuar estuvo investido de buena fé; por el contrario, comprometido con la administración de justicia, tuvo el ánimo de paliar las consecuencias que se avecinaban al sindicado penal, lo que no quebrantó su imparcialidad como juez al momento de adoptar la decisión final.

En suma, indicó si bien la conducta puede predicarse típica, no es antijurídica, tampoco ilícita sustancialmente, pues no afectó el deber funcional que tenía en el ejercicio de sus funciones.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1 Competencia. Este despacho es competente atendiendo lo dispuesto en el numeral tercero del artículo 256 de la Constitución Nacional, en armonía con el artículo 114-2 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia) y con lo previsto en el artículo 194 de la Ley 734 de 2002.

4.2 Presupuesto normativo. Dispone el artículo 142 del CDU., que no podrá proferirse fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado, de modo que en esta postrer etapa procesal el problema jurídico se concreta en verificar en la conducta del disciplinable la concurrencia de prueba sobre sea certeza.

4.3. Caso concreto. Sea lo primero recordar se llamó a juicio ético al doctor **Néstor Jairo Betancourth Hincapié**, por desconocer la prohibición consagrada en el numeral 9º del artículo 154 de la Ley 270 de 1996, armonizado con el deber descrito en el numeral 4º del artículo 138 de la Ley 906 de 2004, que establecen:

Radicación: 2015-00360
Disciplinada: NESTOR JAIRO BETANCOURTH HINCAPIÉ

Artículo 154, numeral 9º *"Expresar y aun insinuar privadamente su opinión respecto de los asuntos que están llamados a fallar",*

Ley 906 de 2004

Artículo 138. Deberes. *"Son deberes comunes de todos los servidores públicos, funcionarios judiciales e intervinientes en el proceso penal, en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, los siguientes:*

4. Guardar reserva sobre los asuntos relacionados con su función, aun después de haber cesado en el ejercicio del cargo".

En aquella oportunidad se reseñó como el funcionario pese a tener el conocimiento del expediente No. 170016106799201484055 que por los delitos de tentativa de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones se tramitaba contra el joven José Albeiro Agudelo, culminada la audiencia de formulación de acusación, realizada el 26 de febrero de 2015, entabló conversación con el abogado Vidal Cardona, a quien le expresó su opinión sobre el asunto, como se verá de la transcripción literal:

Minuto 19:10, el Juez investigado: *"Vidal, listo hermano, oiga usted porque no pone a aceptar a ese muchacho cargos fue capturado en flagrancia o no?, ... póngalo a aceptar cargos, debió haberlo puesto a aceptar cargos porque eso está complicado ahí, hay mucha prueba"*

Abogado: *"eso está complicado doctor pero él se resiste".*

Doctor **Betancourth Hincapié:** *"ah, listo entonces vámonos para juicio y le metemos un canazo bien hijueputa, un canazo grande hermano. Vea: armas agravado y homicidio, tentativa de homicidio agravado, arranca de 34 años..."*

Comportamiento que se reseñó como grave y cometido con culpa grave *"por inobservancia del deber de cuidado que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones"*, al encontrar no sólo se trata de un funcionario con amplios años de experiencia en la rama judicial; la titularidad del despacho; su calidad de director del proceso; el daño a la administración de justicia pues frente a la quejosa, en su escaso conocimiento del derecho, le dejó la sensación de encontrarse frente a un juez parcializado, imprudente, precipitado; *"concepciones que independiente de lo jurídicamente acertadas o no, lo cierto es que desdicen de la labor que se cumple en la rama judicial"*.

Radicación: 2015-00360
Disciplinada: NESTOR JAIRO BETANCOURTH HINCAPIÉ

“...ya que, como él mismo lo dijo no se habían descubierto todos los elementos materiales probatorios y no era posible determinar si la defensa tenía pruebas contundentes de la inocencia del sindicado, y en todo caso sus preconceptos o hipótesis debieron permanecer en su fuero interno ya que, ... la facultad negociadora se tiene entre el ente acusador y la defensa; en la misma no interviene el juez de conocimiento quien debe permanecer imparcial”.

Pues bien, surtidas las etapas previas correspondientes, en las cuales se observó el debido proceso que cobija a este tipo de actuaciones disciplinarias, escuchado el investigado en diligencia de versión libre y espontánea en más de una oportunidad, en ampliación a la quejosa, decretadas y practicadas las pruebas solicitadas por la defensa y las que de oficio se consideraron pertinentes, es posible concluir el cumplimiento del aspecto objetivo necesario para cualificar la falta disciplinaria en los términos del artículo 196 del CDU, por el desconocimiento del deber descrito en la norma.

En efecto, conocido es que con la Ley 906 de 2004 se introdujo al sistema penal colombiano una transformación completa que implicaba para los operados judiciales, defensores, víctimas, fiscales y todos aquellos que intervinieran en su ejecución, la necesidad de modificar la mentalidad, la forma de organizarse, proceder y, en general, enfrentar su aplicación.

Así, el sistema penal acusatorio trazó lineamientos en los que inicialmente se cuenta con dos partes en oposición; la Fiscalía que mediante su investigación determinará la viabilidad de llevar al procesado a una imputación y posterior acusación y, el imputado y/o su apoderado encaminados a controvertir los argumentos del ente acusador, mediante pruebas y alegaciones que permitan la mejor estrategia defensiva a los intereses del procesado.

Se trata entonces de un sistema adversarial, no por contener enemigos o combatientes en su interior sino porque los intervinientes tienen posiciones jurídicas diferentes que, en todo caso, no impiden el diálogo y/o la negociación con miras a encontrar soluciones anticipadas que eviten llegar a juicio. No obstante, la posibilidad de llegar a acuerdos y preacuerdos, de aceptar la imputación, aceptar parcial o totalmente los cargos, entre otras, son facultades de la Fiscalía, la Defensa y el Imputado.

Radicación: 2015-00360
Disciplinada: NESTOR JAIRO BETANCOURTH HINCAPIÉ

Así se extrae de la lectura que sobre los diferentes puntos se hace a lo largo del Código de Procedimiento Penal, especialmente del Título II, Capítulo Único que habla de los preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado, reseñando la finalidad de los mismos *“es humanizar la actuación procesal y la pena; obtener pronta y cumplida justicia; activar la solución de los conflictos sociales que genera el delito; propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto y lograr la participación del imputado en la definición de su caso, la Fiscalía y el imputado o acusado podrán llegar a preacuerdos que impliquen la terminación del proceso”*.

Proceso en el que la intervención del tercero imparcial (juez) se da en razón de avalar o desaprobar la negociación, previa revisión del cumplimiento de los requisitos de ley y el respecto por las garantías y derechos que asisten a los intervinientes en el asunto, entre otras competencias que de manera privativa le fueron asignadas; sin embargo, el articulado le dio facultades negociales, de asesoramiento ni siquiera de proponer fórmulas de arreglo; véase por ejemplo el inciso cuarto del artículo 351 de la Ley 906: *“Los preacuerdos celebrados entre Fiscalía y acusado obligan al juez de conocimiento, salvo que ellos desconozcan o quebranten las garantías fundamentales”*.

En efecto, el rol asignado al Juez en el sistema penal acusatorio lo mantiene como un tercero imparcial, frente al cual tanto la Fiscalía como la Defensa tratan de demostrar los hechos que fundamentan su postura o teoría del caso; empero el Juez desconoce todos los pormenores antes de llegar a la diligencia y será en esta donde se entere de las circunstancias y pruebas que pretende aportar cada una de las partes o intervinientes; lo anterior, sin dejar de lado que en cada una de las etapas del proceso se le asigna un papel específico.

En la etapa de investigación funge como controlador del respeto por los derechos y garantías del procesado, revisando que las actuaciones se cumplan conforme la normatividad; en las audiencias previas al juicio oral, esto es, de formulación de acusación y preparatoria el juez dirige y controla que las partes cumplan con sus obligaciones y se fijen reglas y condiciones claras para el debate en juicio y, ya en la fase de juicio oral, el juez de conocimiento efectúa el debate entre las partes mediante audiencia oral y pública, analiza y decide sobre los argumentos y

pruebas llevadas por cada una de las partes, profiriendo finalmente la sentencia que en derecho corresponda.

En suma, es evidente que tal importancia se dio en la Ley 906 de 2004 a la preservación de la transparencia e imparcialidad, y si se quiere ajenidad, del juez de conocimiento que incluso se creó la figura del juez de control de garantías para realizar las audiencias preliminares.

Lo esbozado en líneas anteriores fué, a grandes rasgos, corroborado por gran parte de los testigos escuchados: doctora Anny Molina Patiño, Procuradora Judicial; los doctores Mariano Ospina Vélez, Fiscal y Julián Andrés Vargas Mascarín, empleado del Juzgado titulado por el investigado; así como el doctor Antonio Toro Ruiz, Magistrado de Sala Penal; todos ellos con largos años de experiencia en el sistema penal acusatorio, quienes explicaron *grosso modo* no es papel del Juez emitir a las partes conceptos u opiniones sobre los casos que están llamados a fallar pues es facultad de la Fiscalía y la defensa el negociar y/o llegar a preacuerdos¹ y, del sindicado el decidir si acepta² o no los cargos en aras a obtener los diversos beneficios que le ofrece la justicia premial.

En esa medida, es palmario no se trata de una interpretación exagerada o exegética de la norma disciplinaria (art. 154, numeral 9º de la LEAJ), pues evidentemente con ella lo que se pretende es salvaguardar la tan apreciada imparcialidad del funcionario que está llamado a definir el proceso mediante la expedición de una providencia definitiva; norma que no se aleja del espíritu del acto legislativo No. 03, por medio del cual se adoptó el sistema penal acusatorio y con este la figura del “*Tercero Imparcial*”, del que se espera actuaciones sopesadas, medidas, cautas y acordes con la investidura del cargo y el rol que desempeña.

En el mismo sentido parece ir la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal de la especialidad, que con sentencias

¹ ARTÍCULO 348. FINALIDADES. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> Con el fin de humanizar la actuación procesal y la pena; obtener pronta y cumplida justicia; activar la solución de los conflictos sociales que genera el delito; propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto y lograr la participación del imputado en la definición de su caso, la Fiscalía y el imputado o acusado podrán llegar a preacuerdos que impliquen la terminación del proceso.

El funcionario, al celebrar los preacuerdos, debe observar las directivas de la Fiscalía General de la Nación y las pautas trazadas como política criminal, a fin de aprestar la administración de justicia y evitar su cuestionamiento.

² ARTÍCULO 353. ACEPTACIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS CARGOS. El imputado o acusado podrá aceptar parcialmente los cargos. En estos eventos los beneficios de punibilidad sólo serán extensivos para efectos de lo aceptado.

Radicación: 2015-00360
Disciplinada: NESTOR JAIRO BETANCOURTH HINCAPIÉ

como la expedida con Ponencia de la Magistrada Ponente Patricia Salazar Cuéllar, el 11 de diciembre de 2018, refirió sobre el rol del Juez en la audiencia de acusación:

“...Las funciones de dirección que debe ejercer el juez en la audiencia de acusación

Según se indicó en precedencia, la decisión de acusar –e imputar– fue objeto de reglamentación constitucional y legal. De allí se destacan las siguientes obligaciones del fiscal: (i) le corresponde generar y verificar la respectiva hipótesis de hechos jurídicamente relevantes que, valga la redundancia, debe incluir los elementos estructurales del respectivo delito; (ii) tiene a cargo la verificación del estándar de conocimiento previsto por el legislador para la procedencia de la acusación –y la imputación–, lo que debe realizar con especial cuidado ante la ausencia de un control judicial sobre ese aspecto en particular; (iii) de manera sucinta y clara, debe comunicarle al sujeto pasivo de la pretensión punitiva los hechos jurídicamente relevantes; y (iv) debe cumplir los demás requisitos formales previstos en los artículos 336 y siguientes de la Ley 906 de 2004.

También quedó claro que el juez de conocimiento no puede realizar un “control material” a la acusación, entendida como la constatación del estándar previsto en el referido artículo 336, porque ello podría comprometer su imparcialidad.

Así las cosas, queda por establecer si el juez de conocimiento está facultado para ejercer labores de dirección de la audiencia frente a los últimos dos aspectos, esto es, la relación sucinta y clara de los hechos jurídicamente relevantes (solo de hechos jurídicamente relevantes), en orden a que la comunicación de los mismos al sujeto pasivo de la pretensión punitiva se ajuste a las previsiones legales, así como el cumplimiento de los demás requisitos formales. Frente a esto último no existe mayor duda, porque, a manera de ejemplo, mal podría permitirse la formalización de la acusación si no se ha logrado “la individualización concreta de quienes son acusados” (Art. 337).

(...)

Tercero. En términos simples, al juez le corresponde velar porque la Fiscalía presente una acusación que reúna los requisitos legales, mas no insinuar ni, menos, ordenar, que opte por una hipótesis fáctica en particular (CSJSP, 05 Oct. 2016, Rad. 45594). En suma, el Juez debe limitarse a garantizar que el fiscal cumpla la ley, lo que se aviene a lo expuesto por la Fiscalía General de la Nación en la Circular 0006 del primero de junio de 2017, donde se resaltó lo siguiente sobre la estructuración de la acusación:

Hechos jurídicamente relevantes. Según la Corte Suprema de Justicia “la relevancia jurídica de hecho está supeditada a su correspondencia con la norma penal”. De esta forma, “los hechos jurídicamente relevantes son los que corresponden al presupuesto fáctico previsto por el legislador en las respectivas normas penales” (...).

Su presentación debe hacerse en forma sucinta, de suerte que el operador jurídico pueda advertir el foco de la respectiva situación fáctica.

Según se acaba de indicar, con este tipo de actos de dirección el juez no propone ni insinúa a la Fiscalía que emita la acusación en un sentido determinado. Su intervención se limita a constatar que la acusación contenga los elementos previstos en la ley, lo que, valga aclararlo, puede resultar beneficioso para el procesado en cuanto tendrá elementos para preparar su defensa e incluso porque puede liberarse del gravoso juicio oral en el evento de que la Fiscalía se percate de que no están dadas las condiciones para formular la acusación. En todo caso, aunque es cierto que al juez le está vedado sugerir hipótesis delictivas, pues con ello podría afectar su

imparcialidad, también lo es que tiene la obligación de constatar que las actuaciones de la Fiscalía cumplan los requisitos legales, pues de ello depende la realización de un proceso viable en el sentido indicado en párrafos precedentes.

En el mismo sentido, en la decisión CSJSP, 16 Abril 2015, Rad. 44866, se resaltó que

Del apartado fáctico del escrito de acusación, entonces, se espera que exprese en lenguaje sencillo, pero claro y suficiente, qué fue lo sucedido, dónde y cuándo ocurrió, cómo se presentó el hecho y, si se posee la información, por qué se materializó este.

(...)

Huelga anotar que ello ninguna implicación formal o material tiene en el principio de imparcialidad, en tanto, no se trata de que el juez admita o controvierta determinada auscultación de los hechos o de su denominación jurídica, sino de que busque resguardar la esencia procesal y sustancial de la acusación, a través de la definición de cuáles son los cargos precisos por los que se llama a juicio al procesado.

Cuarto. Aunque se espera que la claridad del texto legal, el copioso desarrollo jurisprudencial sobre esta temática y las directrices emitidas por el Fiscal General de la Nación sean suficientes para que los fiscales delegados ajusten su comportamiento al ordenamiento jurídico, el juez debe garantizar que la actuación transcurra por los cauces adecuados. Para ello puede resultar especialmente útil la "dirección temprana" de la audiencia, que, en este evento, se reduce a recordar los requisitos legales del acto de acusación, puntualmente, la obligación de presentar una hipótesis de hechos jurídicamente relevantes y la prohibición de incluir en la misma medios de prueba u otros aspectos impertinentes.

(...)

Sexto. Estas mismas actividades de dirección de la audiencia deben ser realizadas por el juez de control de garantías, durante la imputación, en esencia porque: (i) no se discute que en el sistema procesal colombiano debe existir consonancia fáctica entre la imputación y la acusación; (ii) así, es claro que la imputación, en buena medida, determina el contenido de los cargos por los que se hace el llamamiento a juicio; (iii) al igual que la acusación, la imputación conlleva la posible afectación de los derechos del procesado, puede incidir en los derechos de las víctimas y, si no se somete a los requisitos legales, puede afectar la eficacia de la administración de justicia, generar la congestión injustificada del sistema judicial, dar lugar a la destinación de recursos públicos para procesos inviables, etcétera; (iv) esta forma de dirección del proceso no compromete la imparcialidad del juzgador, según se indicó en precedencia; y (v) el juez de garantías no está sometido a las mismas restricciones del juez de conocimiento, simple y llanamente porque no le compete decidir sobre la responsabilidad penal (C-396 de 2007) e incluso tiene a cargo analizar, en el ámbito de la medida de aseguramiento, si las evidencias presentadas por la Fiscalía son suficientes para "inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga".

Ahora bien, partiendo de las anteriores precisiones que se sabe son conocidas por el doctor **Néstor Jairo Betancourth**, pues ejerce como Juez Penal incluso antes de entrar en vigencia el sistema penal acusatorio de la Ley 906 de 2004, es pertinente ahora examinar si el mismo insinuó o expresó su opinión sobre el proceso penal que contra el joven José Albeiro Cardona se instruía por los delitos

Radicación: 2015-00360
Disciplinada: NESTOR JAIRO BETANCOURTH HINCAPIÉ

de tentativa de homicidio agravado y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Para ello, lo primero que se dirá es que la definición de opinar conforme el diccionario de la Real Academia Española es: *“Tener formada una idea u opinión”; “Manifestar una idea u opinión”; “Tener una opinión de alguien o de algo”; “Manifestar una opinión”;* es decir, se limita a la emisión de una idea, que conforme el artículo del decálogo ético, puede ser expresada o aun insinuada privadamente, sin que requiera mayores caracterizaciones y/o exigencias en cuanto a la forma de decirla, los efectos de la misma, o sí para el momento el funcionario tenía o no suficientes elementos de juicio para formarse una idea de la posible sentencia o el desenlace del caso.

De suerte que, aun cuando en concepto de la defensa se hizo un encuadramiento exagerado del comportamiento desplegado por el doctor **Betancourth**, nótese que fue el legislador el que en grado sumo pretendió preservar la imparcialidad, transparencia, cautela, prudencia y reserva de los casos conocidos por funcionarios de la rama judicial; no de otra forma puede explicarse que en la Ley 906, numeral 4º, artículo 138, fuera más allá para imponer como deber del servidor judicial el guardar discreción sobre los asuntos relacionados con su función, aun después de haber cesado en el ejercicio del cargo.

Y aunque la defensa se encaminó a desvirtuar un posible prejuzgamiento, lo cierto es que de ello nunca se habló en el pliego de cargos; lo que se censuró, porqué así lo prescribe la norma es que, estando el doctor **Néstor Betancourth**, como juez de conocimiento en el proceso penal instruido contra el joven José Albeiro Agudelo, hubiere expresado o insinuado privadamente su opinión al abogado de la defensa: *“Vidal, listo hermano, oiga usted porque no pone a aceptar a ese muchacho cargos fue capturado en flagrancia o no?, ... póngalo a aceptar cargos, debió haberlo puesto a aceptar cargos porque eso está complicado ahí, hay mucha prueba” ... “ah, listo entonces vámonos para juicio y le metemos un canazo bien hijueputa, un canazo grande hermano. Vea: armas agravado y homicidio, tentativa de homicidio agravado, arranca de 34 años...”*. Lo anterior, sin tener en cuenta que el camino idóneo para pronunciarse es al interior del proceso, en las audiencias y mediante, órdenes, autos o sentencias (art. 161 de la Ley 906 de 2004).³

³ ARTÍCULO 161. CLASES. Las providencias judiciales son:

Radicación: 2015-00360
Disciplinada: NESTOR JAIRO BETANCOURTH HINCAPIÉ

Justamente, la lectura del pliego de cargos denota, en ningún momento se refirió un prejuzgamiento al punto que ni siquiera se analizó la sentencia sancionatoria proferida el 6 de julio de 2014 contra el joven José Albeiro Agudelo Cardona, ni los argumentos expuestos en ella pues se sabía que si bien en la audiencia de formulación de acusación prevista a partir del artículo 338 y ss de la Ley 906 de 2004, el servidor judicial puede hacerse un panorama de qué tan comprometida esta la responsabilidad del acusado; también lo es qué será la práctica de las pruebas e incluso un preacuerdo celebrado con posterioridad a la audiencia, las que definan el resultado.

Aunado a ello porque no se advirtió en el doctor **Néstor Jairo Betancourth**, el ánimo de anticipar la responsabilidad del sindicado Agudelo Cardona, lo que se pareció al escuchar y ver la audiencia aportada como prueba fue una salida imprudente al indicar al defensor del acusado caminos jurídicos que con sólo confrontar la norma a los delitos imputados se sabían factibles; omitió el funcionario observar el deber de cuidado y las normas que le impiden convertirse en asesor, consejero, menos en tomarse facultades negociadoras que el sistema permitió para la Fiscalía y el imputado, pero no, para el tercero imparcial (juez).

Ahora bien, frente a los argumentos plasmados en los descargos y alegaciones finales, tendientes a demostrar porque no podía hablarse de violación a la reserva legal, explicó el doctor Cesar Augusto López qué, estando cobijada la audiencia de formulación de acusación por el principio de publicidad constituía un despropósito pretender que las partes no pudieran hablar de ella una vez culminada. Al punto son varias las precisiones que deben efectuarse:

l) En primer lugar, no es posible asimilar la reserva que se trata en el numeral 4º del artículo 138 de la Ley 906 de 2004, con la reserva legal prevista para determinados etapas, sujetos procesales, intervinientes y/o asistentes a las

1. <Numeral INCONSTITUCIONAL por omisión legislativa, con efectos diferidos y en los términos señalados en la providencia, en cuanto omite la posibilidad de impugnar todas las sentencias condenatorias> Sentencias, si deciden sobre el objeto del proceso, bien en única, primera o segunda instancia, o en virtud de la casación o de la acción de revisión.

2. Autos, si resuelven algún incidente o aspecto sustancial.

3. Ordenes, si se limitan a disponer cualquier otro trámite de los que la ley establece para dar curso a la actuación o evitar el entorpecimiento de la misma. Serán verbales, de cumplimiento inmediato y de ellas se dejará un registro.

PARÁGRAFO. Las decisiones que en su competencia tome la Fiscalía General de la Nación también se llamarán órdenes y, salvo lo relacionado con audiencia, oralidad y recursos, deberán reunir los requisitos previstos en el artículo siguiente en cuanto le sean predicables.

Radicación: 2015-00360

Disciplinada: NESTOR JAIRO BETANCOURTH HINCAPIÉ

audiencias en materia penal (art. 143, numeral 2°;⁴ 150, numeral 2°;⁵ 152,⁶ 155,⁷ 221,⁸ 235⁹ y 344¹⁰).

⁴ ARTÍCULO 143. PODERES Y MEDIDAS CORRECCIONALES. El juez, de oficio o a solicitud de parte, podrá tomar las siguientes medidas correccionales:

(...)
2. A quien viole una reserva legalmente establecida lo sancionará con multa de uno (1) a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En este caso el funcionario que conozca de la actuación será el competente para imponer la correspondiente sanción.

⁵ ARTÍCULO 150. RESTRICCIONES A LA PUBLICIDAD POR MOTIVOS DE ORDEN PÚBLICO, SEGURIDAD NACIONAL O MORAL PÚBLICA. Cuando el orden público o la seguridad nacional se vean amenazados por la publicidad de un proceso en particular, o se comprometa la preservación de la moral pública, el juez, mediante auto motivado, podrá imponer una o varias de las siguientes medidas:

1. Limitación total o parcial del acceso al público o a la prensa.
2. Imposición a los presentes del deber de guardar reserva sobre lo que ven, oyen o perciben.

⁶ ARTÍCULO 152. RESTRICCIONES A LA PUBLICIDAD POR MOTIVOS DE INTERÉS DE LA JUSTICIA. Cuando los intereses de la justicia se vean perjudicados o amenazados por la publicidad del juicio, en especial cuando la imparcialidad del juez pueda afectarse, el juez, mediante auto motivado, podrá imponer a los presentes el deber de guardar reserva sobre lo que ven, oyen o perciben, o limitar total o parcial el acceso del público o de la prensa.

⁷ ARTÍCULO 155. PUBLICIDAD. Las audiencias preliminares deben realizarse con la presencia del imputado o de su defensor. La asistencia del Ministerio Público no es obligatoria.

Serán de carácter reservado las audiencias de control de legalidad sobre allanamientos, registros, interceptación de comunicaciones, vigilancia y seguimiento de personas y de cosas. También las relacionadas con autorización judicial previa para la realización de inspección corporal, obtención de muestras que involucren al imputado y procedimientos en caso de lesionados o de víctimas de agresiones sexuales. Igualmente aquella en la que decreta una medida cautelar.

⁸ ARTÍCULO 221. RESPALDO PROBATORIO PARA LOS MOTIVOS FUNDADOS. Los motivos fundados de que trata el artículo anterior deberán ser respaldados, al menos, en informe de policía judicial, declaración jurada de testigo o informante, o en elementos materiales probatorios y evidencia física que establezcan con verosimilitud la vinculación del bien por registrar con el delito investigado.

<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> Cuando se trate de declaración jurada de testigo, el fiscal deberá estar presente con miras a un eventual interrogatorio que le permita apreciar mejor su credibilidad. Si se trata de un informante, la policía judicial deberá precisar al fiscal su identificación y explicar por qué razón le resulta confiable. De todas maneras, los datos del informante serán reservados, inclusive para los efectos de la audiencia ante el juez de control de garantías.

Quando los motivos fundados surjan de la presencia de elementos materiales probatorios, tales como evidencia física, videos o fotografías fruto de seguimientos pasivos, el fiscal, además de verificar la cadena de custodia, deberá exigir el diligenciamiento de un oficio proforma en donde bajo juramento el funcionario de la policía judicial certifique que ha corroborado la corrección de los procedimientos de recolección, embalaje y conservación de dichos elementos.

⁹ ARTÍCULO 235. INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES. <Artículo modificado por el artículo 52 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> El fiscal podrá ordenar, con el objeto de buscar elementos materiales probatorios, evidencia física, búsqueda y ubicación de imputados, indiciados o condenados, que se intercepten mediante grabación magnetofónica o similares las comunicaciones que se cursen por cualquier red de comunicaciones, en donde curse información o haya interés para los fines de la actuación. En este sentido, las autoridades competentes serán las encargadas de la operación técnica de la respectiva interceptación así como del procesamiento de la misma. Tienen la obligación de realizarla inmediatamente después de la notificación de la orden y todos los costos serán a cargo de la autoridad que ejecute la interceptación.

En todo caso, deberá fundamentarse por escrito. Las personas que participen en estas diligencias se obligan a guardar la debida reserva.

Por ningún motivo se podrán interceptar las comunicaciones del defensor.

La orden tendrá una vigencia máxima de seis (6) meses, pero podrá prorrogarse, a juicio del fiscal, subsisten los motivos fundados que la originaron.

La orden del fiscal de prorrogar la interceptación de comunicaciones y similares deberá someterse al control previo de legalidad por parte del Juez de Control de Garantías.

PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo 13 de la Ley 1908 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> Los funcionarios de Policía Judicial deberán rendir informes parciales de los resultados de la interceptación de comunicaciones cuando dentro de las mismas se establezcan informaciones que ameriten una actuación inmediata para recolectar evidencia o elementos materiales probatorios e impedir la comisión de otra u otras conductas delictivas. En todo caso, el fiscal comparecerá ante el juez de control de garantías a efectos de legalizar las actuaciones cuando finalice la actividad investigativa.

¹⁰ ARTÍCULO 345. RESTRICCIONES AL DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA. Las partes no podrán ser obligadas a descubrir:

1. Información sobre la cual alguna norma disponga su secreto, como las conversaciones del imputado con su abogado, entre otras.
2. Información sobre hechos ajenos a la acusación, y, en particular, información relativa a hechos que por disposición legal o constitucional no pueden ser objeto de prueba.
3. Apuntes personales, archivos o documentos que obren en poder de la Fiscalía o de la defensa y que formen parte de su trabajo preparatorio del caso, y cuando no se refieran a la manera como se condujo una entrevista o se realizó una deposición.
4. Información cuyo descubrimiento genere un perjuicio notable para investigaciones en curso o posteriores.
5. Información cuyo descubrimiento afecte la seguridad del Estado.

PARÁGRAFO. En los casos contemplados en los numerales 4 y 5 del presente artículo, se procederá como se indica en el inciso 2o. del artículo 383 pero a las partes se les impondrá reserva sobre lo escuchado y discutido.

Véase como el artículo 138 de la Ley 906, se encuentra reseñado en el Título V: *"De deberes y poderes de los intervinientes en el proceso penal"*, Capítulo I: *"De los deberes de los servidores judiciales"*, siendo una restricción consagrada de manera general para evitar, entre otras, la indebida utilización de la información que muchas veces conlleva aspectos personales e íntimos de quienes se ven involucrados en esta clase de trámites penales.

Y si bien en su generalidad las actuaciones desarrolladas en el sistema penal acusatorio son públicas, también existen algunas restricciones legales y la facultad del juez de impedir el acceso del público (art. 18 Ley 906 de 2004)¹¹.

II) Tampoco es posible predicar el mismo catálogo de deberes, facultades y prohibiciones para cada uno de los intervinientes en el proceso penal, menos aun cuando se trata de servidores públicos, que conforme el artículo 6º de la Constitución Política son responsables por infringir la Constitución y las leyes, por omisión y extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

De suerte que, al tratarse de roles y puntos de vista diferentes e incluso facultades claramente diferenciables, no resulta descabellado pensar que mientras el Fiscal y la Defensa pueden buscar escenarios y encuentros propicios para negociar; al juez, le este vedada la posibilidad de hacerse parte o intervenir en los mismos dada la naturaleza de su función – tercero imparcial con el conocimiento y capacidad de definir las controversias –.

III) La reserva a que se hizo alusión en el pliego de cargos se encuentra directamente prescrita por el código de procedimiento penal; es decir, no se trató del imaginario ético; desde la expedición y entrada en vigencia de la Ley 906, se supone, viene rigiendo la actividad de los servidores públicos, funcionarios judiciales e intervinientes en el proceso penal, quienes tienen la obligación de observarla y acatarla, desde luego en el marco de las facultades que el mismo código les permitió.

IV) Siendo en el caso concreto, un deber **funcional** que no recae en el público que haya tenido la oportunidad de comparecer a la diligencia y enterarse de lo allí

¹¹ ARTÍCULO 18. PUBLICIDAD. La actuación procesal será pública. Tendrán acceso a ella, además de los intervinientes, los medios de comunicación y la comunidad en general. Se exceptúan los casos en los cuales el juez considere que la publicidad de los procedimientos pone en peligro a las víctimas, jurados, testigos, peritos y demás intervinientes; se afecte la seguridad nacional; se exponga a un daño psicológico a los menores de edad que deban intervenir; se menoscabe el derecho del acusado a un juicio justo; o se comprometa seriamente el éxito de la investigación.

Radicación: 2015-00360
Disciplinada: NESTOR JAIRO BETANCOURTH HINCAPIÉ

acontecido; tampoco frente al ente acusador y los abogados de los sindicatos penales – quienes tienen facultad negociadora -; menos aun sobre el sindicato – que puede aceptar los cargos, pre acordar, negociar con la Fiscalía -; debe observarse en razón del tercero imparcial (juez), servidor del que en todo momento se espera ejerza un papel integral e incólume cuya presencia y actuación inspire la confianza necesaria en las partes y el colectivo, que independientemente del resultado jurídico no tengan como controvertir los valores éticos del fallador sino sus argumentos jurídicos.

Así las cosas, hasta el momento analizados los argumentos de descargo y alegaciones finales de la bancada de la defensa y, las pruebas acopiadas, para la Sala no cabe duda de cumplirse la adecuación típica en la prohibición descrita en el numeral 9º del artículo 154 de la Ley 270 de 1996¹², empero ello no es para proferir una sentencia sancionatoria pues, tal y como lo refirió el doctor Jaime Enrique Montoya Marín, Procurador Judicial, no basta el simple ajuste de la conducta en la norma éticamente reprochable.

Por consiguiente, han de analizarse los testimonios solicitados por la defensa, todos ellos, personas con amplia experiencia en el sistema penal acusatorio, mediante el cual se argumentó: si bien en otros Departamentos o Distritos Judiciales del país no era factible que se presentaran situaciones como la examinada en este asunto disciplinario, lo cierto es que en el Departamento de Caldas se trataba de una realidad del diario vivir.

Narraron como en los pasillos y estrados judiciales coexiste un ambiente amigable, de camaradería y amistad, siendo usual, normal y hasta regla de caballeros compartir un tinto entre el Fiscal, el Agente del Ministerio Público, el Defensor e incluso el Juez, hablando en esos espacios de la vida personal y sólo unas pocas veces de las audiencias.

Algunos de los testigos, como los abogados litigantes David Becerra y Rafael Mejía Guevara, así como el Juez Mauricio Vidal Bedoya, afirmaron no ver con malos ojos la conducta del Juez disciplinado de mencionar al abogado Vidal Cardona pusiera a aceptar cargos al sindicato penal; por el contrario, así debería ser, es una forma de agilizar los procesos y de poderse llegar a terminaciones

¹² 9. Expresar y aun insinuar privadamente su opinión respecto de los asuntos que están llamados a fallar.

anticipadas; de depurar la técnica e incluso ayudar al propio encartado, que podía verse beneficiado del concepto acertado del juez de conocimiento.

El propio Magistrado Antonio Toro, señaló en los encuentros de la jurisdicción y en otros escenarios se habían comentado este tipo de situaciones y aunque "nosotros" dijimos: no parece estar bien, no luce adecuado; se les sugirió buscar otras salidas como por ejemplo obtener la intervención del Ministerio Público; señalando en todo caso por el prestigio de los jueces del Distrito, jamás verían ello como un acto de corrupción y/o perversión; agregando: "los funcionarios puede que se equivoquen pero nunca de mala fe".

En efecto, esta Sala tampoco calificó la falta como un acto de corrupción ni mala fé, sino como una evidente imprudencia, "inobservancia del deber de cuidado", siendo en esa medida improcedente el tratar de desvirtuar una malicia, apasionamiento, ánimo dañoso o por el contrario de favoritismo hacia alguno de los intervinientes, de la que nunca se habló.

Lo anterior, por cuanto desde el pliego de cargos se podía vislumbrar y así se ratificó con los testigos, no existió en el doctor **Betancourth** una intención dañina, por el contrario, recuérdese como el propio abogado de la defensa, doctor Vidal Cardona, manifestó jamás se le ocurrió utilizar las palabras del doctor **Néstor Jairo** para recusarlo y/o argumentar su escrito de apelación; al punto que discutió con la señora Lina María Cardona, los procesos se ganaban jurídicamente y no con chismes.

Así mismo lo contó la quejosa al ser escuchada en diligencia de ampliación de queja, acotando haberse molestado con el abogado defensor de su hijo quien se negó a utilizar la desatinada conversación para argumentar su apelación, pues según el doctor Vidal las manifestaciones que el funcionario judicial le hizo, fueron en razón de su amistad.

Por su parte, la señorita Mónica Builes, quien acompañó al Juez a la diligencia el 26 de febrero de 2015, manifestó con extrañeza y asombro no entender que había de malo en lo sucedido, si ello era usual en el sistema penal acusatorio: que las partes conversaran con el Juez; que ante la abundante prueba se hicieran sugerencias de aceptar cargos e incluso que al sindicado se le dijera cuál era el delito por el que se le investigaba y las consecuencias jurídicas a las que se podía

Radicación: 2015-00360
Disciplinada: NESTOR JAIRO BETANCOURTH HINCAPIÉ

enfrentar de hallársele responsable – situación última frente a la cual debe señalarse, es notoriamente distinta pues la enunciación del delito y las consecuencias jurídicas del mismos hacen parte de la dinámica de transparencia que precisamente pretendió institucionalizar el sistema penal acusatorio –.

Y aunque el doctor Mauricio Vidal Bedoya, además de lo anterior refirió, para el funcionamiento del andamiaje correspondía al juez ser activista, contando que aun cuando inicialmente, en su propia experiencia, se mostró renuente a escuchar a las partes por fuera de audiencia, después advirtió lo provechoso de hacerlo y evitar que llegaran a las diligencias con preacuerdos impensables que se hacía necesario no aprobar y tener el consecuente recurso de apelación, siendo un desgaste innecesario para el aparato judicial que con una “intervención temprana” del titular del despacho se podía evitar “claro está sin caer en un asesoramiento ilegal”, véase que el hecho de que en el Departamento de Caldas, se trate de una práctica usual, ello no deroga la norma ni la inutiliza pues a la fecha aún se encuentra vigente.

No tiene dudas esta Corporación y ello, nunca se ha puesto en tela de juicio, el doctor **Néstor Jairo Betancourth Hincapié** es un funcionario con amplias calidades intelectuales y personales; así lo manifestaron la mayor parte de los testigos, lo demostraron sus calificaciones de servicios en nivel de excelencia, la ausencia de antecedentes disciplinarios y, el respeto, prestigio y admiración en la que se refieren a él testigos como el Magistrado Antonio Toro, la Procuradora Anny Molina Patiño, entre otros tantos que en el mismo sentido se pronunciaron y, con quienes tiene contacto en virtud de su labor judicial, como jefe inmediato y persona, esgrimiéndose además era un juez en todo el sentido de la palabra frente al cual se sabía asertivo en sus posturas jurídicas, sin ánimo de protagonismo, parcialización, apasionamientos o venalidades.

No obstante, lo cierto es que en el análisis del caso concreto permitió sin lugar a dudas llegar a la conclusión que en los hechos traídos a colación desbordó sus facultades incurriendo en la prohibición descrita en el numeral 9º del artículo 154 de la Ley 270 de 1996 y, desconociendo el deber que de manera armónica se complementa, en el sentido de guardar la reserva de los asuntos que este llamado a fallar, numeral 4º del artículo 138 de la Ley 906 de 2004, sin que exista ningún antecedentes disciplinario al respecto, ya fuere porque no se había denunciado

con anterioridad; no había incurrido en la conducta; no se había obtenido prueba que lo demostrara o porque como el caso del proceso disciplinario No. 2014-00069 conocido como ponente por el doctor José Ricardo Romero, se trató de atacar mediante el proceso disciplinario el sentido de la sentencia condenatoria, situación que se enmarca en el campo de la autonomía funcional mientras no se trate de pronunciamientos descabellados, amañados y/o completamente contrarios a la ley y agresora de derechos. Siendo lo cierto que en aquel proceso disciplinario lograron desvirtuarse los supuestos actos de extralimitación o desbordamiento de sus funciones.

Empero, en el presente asunto se trató de un comportamiento descuidado que quedó grabado, demostrándose incurrió en el mismo por actuar de manera apresurada; no por el hecho de no haber revisado que la grabación en efecto estuviere apagada – hecho irrelevante – sino porque llevado por su amistad con el abogado Vidal Cardona, que fue reconocida tanto por el disciplinado como por el litigante, quien adujo conocer al juez investigado hace más de 20 años; se permitió ejercer un rol impropio de su cargo.

Por ello, la conducta se calificó como culposa, por imprudente, descuidada, en ningún momento se observó en el titular del Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales, el ánimo, la intención o alevosía de desconocer la norma con el ánimo de favorecer o perjudicar al joven José Albeiro Agudelo.

En esa medida las pruebas y argumentaciones allegadas al paginario no alcanzaron a derribar ni el cargo formulado ni la calificación de la falta como grave culposa; mismos que analizado nuevamente el contexto permiten inferir que siendo la administración de justicia un servicio esencial (art. 43, numeral 1º, Ley 734 de 2002); que se trata de un funcionario con experiencia en la rama judicial desde el año 1987, que desde el 16 de junio de 1989 ha ejercido cargos como Juez de la República y antes de entrar en vigencia el sistema penal acusatorio ya venía desempeñándose como juez penal (año 1995), mencionándose por todos los testigos el conocimiento, presteza y propiedad con que se le ve manejar los lineamientos propios del sistema penal acusatorio.

Que su cargo es de titular del despacho y director del proceso penal; que su actuación afectó la confianza en la administración de justicia, al punto que la señora Lina María Cardona no sólo formuló la presente queja disciplinaria sino

Radicación: 2015-00360
Disciplinada: NÉSTOR JAIRO BETANCOURTH HINCAPIÉ

denunció penalmente al funcionario por considerar, después de haber sido asesorada en la Procuraduría, que el juez presuntamente incurrió en el delito de prevaricato; permiten con certeza llegar a la conclusión lo procedente expedir una sentencia sancionatoria contra el doctor **Néstor Jairo Betancourth hincapié**.

Sentencia sancionatoria que conforme los lineamientos de los artículo 44 y ss del CDU, disponen para la falta y su calificación como grave culposa la sanción de **SUSPENSION** del ejercicio de sus funciones por **UN MES**, atendiendo los criterios establecidos en el artículo 47 *ibídem*, pues se trata de un servidor judicial que por sus años de experiencia ejerciendo como Juez de la República, tenía porque conocer las normas que le imponen deberes o restricciones a su actividad (literal i), tratándose como se dijo de un juez de conocimiento (literal j) que desempeñaba un rol particular en el proceso penal que se siguió contra el joven José Albeiro Agudelo Cardona por los delitos de tentativa de homicidio, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Servidor judicial que independientemente de la conclusión a que se ha llegado en el presente asunto ha demostrado a lo largo de los años, ser eficiente y diligente en el desempeño del cargo y en la realización de sus funciones como lo atestiguaron la mayor parte de los declarantes (literal b), siendo entonces la tasación a que se hizo alusión suficiente para condenar el comportamiento imprudente demostrado.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Caldas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. SANCIONAR al doctor **NÉSTOR JAIRO BETANCOURTH HINCAPIÉ**, acusado en condición de **JUEZ SÉPTIMO PENAL DEL CIRCUITO DE MANIZALES**, con **SUSPENSIÓN DEL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES POR EL TÉRMINO DE UN (1) MES**, al hallársele responsable del desconocimiento de la prohibición descrita en el numeral 9º del artículo 154 de la Ley 270 de 1996, precepto armonizado con el numeral 4º del artículo 138 de la Ley 906 de 2004, falta calificada como grave, cometida a título de culpa grave, conforme a lo razonado en la parte motiva de este pronunciamiento.


Radicación: 2015-00360
Disciplinada: NESTOR JAIRO BETANCOURTH HINCAPIÉ


SEGUNDO. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE ESTA SENTENCIA al representante del Ministerio Público, al disciplinado y su apoderado de confianza (artículos 84, 85 y 87 de la ley 200 de 1.995; 101 y 107 de la ley 734 de 2002).

TERCERO. Si no fuere apelado, consúltese el fallo ante la SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA (artículo 208 de la ley 734 de 2.002, parágrafo 1º art. 112 LEAJ)

CUARTO. En firme la sentencia, comuníquese mediante oficios a la SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, a la PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE ESTA CIUDAD, a la PAGADURIA DE LA DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL y a la OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, para los fines previstos en el artículo 220 de la Ley 734 de 2002.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


MIGUEL ÁNGEL BARRERA NÚÑEZ
Magistrado Ponente


JOSÉ RICARDO ROMERO CAMARGO
Magistrado



Consejo Superior de la Judicatura

Sala Jurisdiccional Disciplinaria

SECRETARIA JUDICIAL

Bogotá, D.C., 22 de Septiembre de 2020

Telegrama S.J. SAAM 20167

Doctor

NESTOR JAIRO BETANCOURTH HINCAPIE-

JUEZ SEPTIMO PENAL DEL CIRCUITO DE MANIZALES

NJBH07@YAHOO.ES

NOTIFICOLE, DENTRO DEL PROCESO DISCIPLINARIO NO. 170011102000201500360 01 EN SALA 85 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020: RESOLVIO: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 14 de febrero de 2019, **PRIMERO: CONFIRMAR** la sentencia proferida el 14 de febrero de 2019, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, por medio de la cual se **SANCIONÓ** al doctor **NÉSTOR JAIRO BETANCOURTH HINCAPIÉ**, JUEZ SÉPTIMO PENAL DEL CIRCUITO DE MANIZALES, con suspensión de **UN (1) MES** en el ejercicio del cargo, por haber incurrido en la falta prevista en el artículo 154 numeral 9º de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el numeral 4º del artículo 138 de la Ley 906 de 2004, imputada como grave a título de culpa grave, conforme lo indicado en esta providencia.

ADVIRTIENDOLE QUE DE ACUERDO A LOS ARTÍCULOS 205 Y 206 DE LA LEY 734 DE 2002, LAS PROVIDENCIAS PROFERIDAS POR ESTA SALA SE NOTIFICARAN SIN PERJUICIO DE SU EJECUTORIA INMEDIATA.

TENIENDO EN CUENTA LOS DECRETOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA QUE ESTABLECEN EL AISLAMIENTO OBLIGATORIO Y EL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA, LOS ACUERDOS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ENTRE ELLOS EL ACUERDO PCSJSA20-11521,11549,11581, DONDE SE ORDENÓ LA REAPERTURA DE LOS TÉRMINOS EN LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS DE ABOGADOS Y FUNCIONARIOS Y DEMÁS ACUERDOS EXPEDIDOS POR EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA LO DISPUESTO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS DE ESTA SALA, Y LO ESTABLECIDO MEDIANTE DECRETO LEGISLATIVO 806 DE 2020 POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA EL USO DE TECNOLOGÍAS PARA LAS COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES EN LAS ACTUACIONES JUDICIALES, CUMPLIDOS LOS TÉRMINOS SE PROCEDERÁ A SU NOTIFICACIÓN POR ESTADO; DE LO CUAL SE ANEXA CONSTANCIA SECRETARIAL EN 10 FOLIOS. CUALQUIER SOLICITUD FAVOR DIRIGIRLA AL CORREO acuerdo11517saladisciplinaria@consejosuperior.ramajudicial.gov.co

ATENTAMENTE

Elaboro: Sebastian Aguilar Muñoz
Escribiente Nominado

YIRA LUCIA OLARTE AVILA
SECRETARIA JUDICIAL

Revisó: Paula Carrillo Castaño.
Abogada Grado 21.



Consejo Superior de la Judicatura

Sala Jurisdiccional Disciplinaria

SECRETARIA JUDICIAL

Bogotá, D.C., 22 de Septiembre de 2020

Telegrama S.J. SAAM 20168

Doctor

CESAR AUGUSTO LOPEZ LONDOÑO

DEFENSOR DEL DR. NESTOR JAIRO BETANCOURTH HINCAPIE-

CELOPEZL@YAHOO.ES

NOTIFICOLE, DENTRO DEL PROCESO DISCIPLINARIO NO. 170011102000201500360 01 EN SALA 85 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020: RESOLVIO: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 14 de febrero de 2019, **PRIMERO: CONFIRMAR** la sentencia proferida el 14 de febrero de 2019, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, por medio de la cual se **SANCIONÓ** al doctor **NÉSTOR JAIRO BETANCOURTH HINCAPIÉ**, JUEZ SÉPTIMO PENAL DEL CIRCUITO DE MANIZALES, con suspensión de **UN (1) MES** en el ejercicio del cargo, por haber incurrido en la falta prevista en el artículo 154 numeral 9º de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el numeral 4º del artículo 138 de la Ley 906 de 2004, imputada como grave a título de culpa grave, conforme lo indicado en esta providencia.

ADVIRTIENDOLE QUE DE ACUERDO A LOS ARTÍCULOS 205 Y 206 DE LA LEY 734 DE 2002, PROVIDENCIAS PROFERIDAS POR ESTA SALA SE NOTIFICARAN SIN PERJUICIO DE SU EJECUTORIA INMEDIATA.

TENIENDO EN CUENTA LOS DECRETOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA QUE ESTABLECEN EL AISLAMIENTO OBLIGATORIO Y EL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA, LOS ACUERDOS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ENTRE ELLOS EL ACUERDO PCSJA20-11521,11549,11581, DONDE SE ORDENÓ LA REAPERTURA DE LOS TÉRMINOS EN LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS DE ABOGADOS Y FUNCIONARIOS Y DEMÁS ACUERDOS EXPEDIDOS POR EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA LO DISPUESTO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS DE ESTA SALA, Y LO ESTABLECIDO MEDIANTE DECRETO LEGISLATIVO 806 DE 2020 POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA EL USO DE TECNOLOGÍAS PARA LAS COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES EN LAS ACTUACIONES JUDICIALES, CUMPLIDOS LOS TÉRMINOS SE PROCEDERÁ A SU NOTIFICACIÓN POR ESTADO; DE LO CUAL SE ANEXA CONSTANCIA SECRETARIAL EN 10 FOLIOS. CUALQUIER SOLICITUD FAVOR DIRIGIRLA AL CORREO acuerdo11517saladisciplinaria@consejosuperior.ramajudicial.gov.co

ATENTAMENTE

Elaboro: Sebastian Aguilar Muñoz
Escribiente Nominado

YIRA LUCIA OLARTE AVILA
SECRETARIA JUDICIAL

Revisó: Paula Carrillo Castaño.
Abogada Grado 21.



República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Secretaría General

Bogotá D. C., seis (6) de octubre de dos mil veinte (2020).

Se recibió en la Secretaría General de la Corporación, la acción de tutela instaurada por el señor NÉSTOR JAIRO BETANCOURTH HINCAPIÉ, contra el Consejo Superior de la Judicatura – Sala Jurisdiccional Disciplinaria.


DAMARIS ORJUELA HERRERA
Secretaria General


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA –SECRETARÍA GENERAL

No. 11- 001-02-30-000-2020-00678-00

Bogotá, D. C, 6 de octubre de 2020

Repartido a la Magistrada

Dra. Patricia Salazar Cuéllar


JORGE LUIS QUIROZ ÁLEMAN

El Presidente

La Secretaria



Bogotá, D.C., 7 OCT. 2020

En la fecha pasa al Despacho de la doctora Salazar Cuéllar, Magistrada de la Sala de Casación Penal de la Corporación, a quien correspondió por reparto, la anterior acción de tutela.

Consta de 1 cuaderno con 72 folios.


DAMARIS ORJUELA HERRERA
Secretaria General